

DESIGUALDAD DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO

DIAGNÓSTICO PARA LA PLANIFICACIÓN Y LA GESTIÓN PÚBLICA CON ENFOQUE DE IGUALDAD

Desigualdades de género en el municipio de El Alto.
Diagnóstico para la planificación y la gestión pública con enfoque de igualdad.

Elaborado por:
Equipo Yachay Lab: Silvia Fernández Cervantes, Camilo W. Butron Fernández, Roxana Azeñas, Gabriela Blas Chumacero, Nina Mansilla Cortes y Kosset Mamani.
© Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza

Directora ejecutiva:
Mónica Gutierrez Medina

Diseño y diagramación:
Oveja Creativa

Impresión:

Dirección:
Avenida Juan Pablo II, zona 16 de julio, calle Eulert, # 280.

Teléfonos: 2840351 – 2841963
Correo: gregorias@gregorias.org.bo
El Alto – La Paz, Bolivia, agosto del 2026

La presente publicación ha sido elaborada en el marco del proyecto "Economías Transformadoras desde la Igualdad de Género y Feminismo", financiado por la Agencia Francesa de Cooperación al Desarrollo (AFD).

PRESENTACIÓN

El Alto es una ciudad construida desde la fuerza, la organización y la resistencia de su gente. Es también un territorio donde las mujeres han sido protagonistas de las luchas por la dignidad, los derechos y mejores condiciones de vida. Sin embargo, esta participación histórica y cotidiana no se traduce todavía en igualdad de oportunidades, autonomía económica, acceso efectivo a servicios ni en una participación plena en las decisiones públicas.

El presente diagnóstico de ***"Desigualdades de género en el municipio de El Alto"*** nace de la necesidad de mirar esta realidad con datos, pero también desde las voces, experiencias y propuestas de las propias mujeres. Como Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, asumimos que producir conocimiento desde una perspectiva feminista es también una forma de transformar las relaciones de desigualdad y fortalecer la capacidad de las mujeres para exigir sus derechos y participar en las decisiones que afectan sus vidas.

Este diagnóstico articula información cuantitativa y cualitativa proveniente de la Encuesta Municipal Digital sobre Desigualdades de Género, talleres participativos con organizaciones de mujeres, entrevistas y fuentes oficiales. Esta triangulación permite identificar las desigualdades que atraviesan la vida de las mujeres alteñas en dimensiones fundamentales como el empleo y los ingresos, el trabajo de cuidados, la autonomía económica, el acceso a servicios públicos, la educación, la salud, la participación política y la violencia en razón de género.

Los resultados muestran que las desigualdades no son hechos aislados ni problemas individuales. Se encuentran profundamente vinculadas con la forma en que se organiza nuestra economía, nuestro territorio, el trabajo y la vida cotidiana. Las mujeres están sobrerrepresentadas en empleos informales y precarios; sostienen una parte desproporcionada del trabajo de cuidados; enfrentan brechas en el acceso a activos e ingresos; viven importantes barreras para acceder a servicios de salud y protección frente a la violencia; y continúan siendo excluidas de los espacios donde se toman decisiones sobre las políticas municipales. Al mismo tiempo, el diagnóstico recoge una agenda clara de las mujeres alteñas, dirigida a la construcción del nuevo ciclo de planificación municipal 2026–2030.

Por ello, ponemos este diagnóstico a disposición de las autoridades municipales, organizaciones sociales, instituciones y ciudadanía de El Alto como una herramienta para la acción y la incidencia pública. Los datos aquí presentados nos convocan a pasar de la identificación de las brechas a decisiones concretas: políticas públicas con enfoque de igualdad, presupuestos suficientes, servicios accesibles y mecanismos efectivos de participación de las mujeres.

Porque la igualdad de género no puede ser únicamente un discurso: debe convertirse en una prioridad de la planificación, de la gestión pública y de la vida cotidiana de El Alto.

Mónica Gutiérrez Medina
Directora Ejecutiva
Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO **7**

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS **12**

I. Introducción 14

II. Metodología y fuentes de información 17

III. Aproximación sociodemográfica al municipio de El Alto 19

IV. Desigualdades de género en el municipio de El Alto 24

4.1. Sesgos de género en el mercado laboral 24

4.1.1 Características de la participación económica y de empleo en El Alto 25

4.2. Desigualdad de Ingresos 34

4.3. La Precariedad laboral, de ingresos y el trabajo de cuidados 37

Más sobre trabajo de cuidados **41**

4.4. Precarización laboral y autonomía económica 45

Acceso a activos **45**

Autonomía económica **47**

4.5. Servicios sociales públicos: condiciones materiales 49

Servicios básicos **49**

Educación **50**

Disponibilidad y acceso a servicios de salud **54**

4.6. Participación Política 58

4.7. La violencia contra las mujeres, niñas y niños 62

Capacidad institucional del GAMEA para la atención a las violencias: la Plataforma de Atención Integral **67**

4.8. La cuestión de los cuidados en el municipio de El Alto 69

V. Percepción Ciudadanas Sobre la Gestión y Políticas Municipales 72

El PTDI bajo lente de la igualdad de género **74**

Propuestas y demandas de las mujeres para el GAMEA **74**

VI. Conclusiones - hallazgos: El perfil de las desigualdades de género en El Alto 76

VII. Recomendaciones para la Gestión Municipal 2026-2030 80

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES CONSULTADAS **85**

RESUMEN EJECUTIVO

El presente diagnóstico analiza las desigualdades de género en el municipio de El Alto a partir de la triangulación de tres fuentes: la Encuesta Municipal Digital sobre Desigualdades de Género (EM-DG, n=203), talleres de diagnóstico participativo con organizaciones de mujeres, y fuentes secundarias oficiales. El estudio abarca nueve dimensiones: empleo e ingresos, trabajo de cuidados, autonomía económica, servicios públicos, educación, salud, participación política, violencia en razón de género, y percepción ciudadana sobre políticas municipales.

Contexto sociodemográfico: un municipio ch'ixi y mayoritariamente plebeyo

El Alto es la segunda ciudad más poblada de Bolivia y la principal urbe aymara del continente. Su dinámica está marcada por la migración interna (especialmente rural), la economía minera, la insurrección de 2003 y una economía popular densa. Es un municipio ch'ixi (coexistencia en tensión de lo indígena y lo mestizo) y mayoritariamente plebeyo.

- **AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA (CENSO INE 2024):** 47,4% aymara, 38,4% mestiza/o. La matriz cultural aymara estructura la organización familiar, el uso del territorio y las violencias.
- **POBLACIÓN:** 885.035 habitantes (51,76% mujeres, 48,24% hombres). 99,9% urbano.
- **POBREZA E INGRESOS (NACIONAL):** La pobreza monetaria bajó del 60,6% al 37,6% entre 2005 y 2024, pero persisten brechas. El ingreso per cápita del estrato medio vulnerable es Bs. 1.162, y d el alto Bs. 5.839 (bolivianos de 2016).
- **MIGRACIÓN (EM-DG 2026):** El 15,3% de la muestra migró en los últimos 10 años. Las mujeres migran mayoritariamente por decisión familiar (37,5%) o matrimonio (31,2%) , no por proyectos propios. El 45,2% reportó mejora económica tras migrar, pero persiste una "doble precariedad" rural-urbana. Un 37,3% de mujeres considera migrar nuevamente en los próximos dos años.

Desigualdades de género en el mercado laboral: precariedad feminizada y racializada

La economía informal es la norma (83,9% del empleo total en 2024). Las mujeres enfrentan sesgos estructurales: son el 65,9% de la población inactiva y el 57,8% de los desocupados.

- **TASA DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA (EM-DG):** Mujeres 80,5% en comparación con hombres 73,5%. Sin embargo, 43,2% de las mujeres son trabajadoras por cuenta propia frente a 28,9% de hombres, mientras que solo el 28,8% de mujeres tiene empleo asalariado comparado con el 37,3% de hombres.
- **SECTORES FEMINIZADOS Y PRECARIOS:** El 62% del comercio y el 60% del sector agropecuario son femeninos. Dentro del comercio, el 35,6% de mujeres trabaja en puestos de mercado, ambulantaje o tiendas (condiciones de intemperie, sin infraestructura). En servicios de limpieza y cuidados, el 11% son mujeres y el 1,2% hombres.
- **RACIALIZACIÓN DE LA PRECARIEDAD:** El 51,4% de la población aymara trabaja por cuenta propia (vs. 21,3% mestiza). La intersección de ser mujer y aymara concentra las formas más vulnerables de inserción laboral.
- **EDUCACIÓN VS. INGRESOS:** El 75,4% de las mujeres encuestadas tiene educación superior comparado con el 78,3% hombres, pero ello no se traduce en mejores empleos ni salarios. La brecha salarial persiste por sesgo androcéntrico.

Trabajo de cuidados y autonomía económica: la jornada de más de 24 Horas

El trabajo de cuidados recae abrumadoramente sobre las mujeres, configurando una “jornada de más de 24 horas”. Esa expresión no es hipérbole, es la síntesis política de una organización social del trabajo, como expresaron las participantes del taller.

- **TIEMPO DIARIO EN CUIDADOS (ENCUESTA DE USO DEL TIEMPO CEDLA 2023):** Las mujeres le dedican 6 horas con 10 minutos, los hombres 3 horas con 19 minutos. En El Alto (EM-DG), el 28,8% de las mujeres dedica 5 o más horas diarias a cuidados (frente a 3,6% de hombres). El 48,3% de mujeres es la principal responsable del cuidado en el hogar.
- **INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE CUIDADOS (EM-DG):** Solo el 2% de la población considera que existen guarderías suficientes y accesibles. El 40,9% dice que no existen, y el 57,1% que son lejanas/insuficientes. Para personas con discapacidad y personas adultas mayores, más del 77% reporta inexistencia de servicios.
- **ESTRATEGIAS DE CUIDADO DURANTE LA JORNADA LABORAL:** Solo el 1,7% de madres usa guardería pública; el 17,8% deja a sus hijas/os solas/os o al cuidado de hermanas/os mayores (delegación del cuidado a niñez).
- **ACCESO A ACTIVOS (EM-DG):** Solo el 17,8% de las mujeres tiene tierra o propiedad a su nombre comparado con el 42,2% de hombres. El 62,7% de mujeres no tiene tierras (vs. 45,8% de hombres). El 58,5% de las mujeres no accede a crédito formal.
- **AUTONOMÍA ECONÓMICA EN DISPUTA:** Si bien el 58,5% de mujeres afirma decidir sola sobre sus ingresos, en el taller denunciaron que esos ingresos apenas alcanzan para la comida y que los maridos se desentienden (“tú ganas, tienes tu plata”). La autonomía real exige corresponsabilidad de los hombres y el Estado en los trabajos de cuidados.

Servicios sociales: debilidades en acceso y cobertura en salud, educación

El acceso a servicios no es solo proximidad; hay barreras de horario, idioma, trato y costo de oportunidad.

- **SALUD (EM-DG):** El 81,3% de la población usa el Seguro Universal de Salud (SUS). Sin embargo, solo el 27,1% de mujeres tiene un centro de salud cercano sin dificultades; el 51,7% enfrenta barreras de acceso (horarios, transporte, discriminación). El 59,3% de las mujeres no recibió ninguna atención en salud sexual en el último año. Existe demanda insatisfecha de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por objeción de conciencia y falta de medicamentos.
- **EDUCACIÓN (INE 2024):** En El Alto, el 33,79% de mujeres alcanzó educación superior (vs. 33,53% hombres). Pero la brecha rural-urbana es enorme: en área rural, solo el 11,4% de mujeres accede a superior, y el 15,25% es analfabeta.
- **SERVICIOS BÁSICOS (EM-DG):** Alta cobertura de electricidad (99,5%) y agua (97%), pero alcantarillado solo 89,2% e internet 47,3% (brecha digital que excluye a mujeres de trámites y teletrabajo).

Violencia contra las mujeres y seguridad: inseguridad total en el espacio público

La violencia es estructural y normalizada. El acceso a justicia es débil y la impunidad alta.

- **PREVALENCIA (ONU MUJERES 2023, EL ALTO):** El 39,6% de mujeres sufrió violencia física alguna vez; 44,8% psicológica; 13,5% sexual; 20% violencia digital. Solo el 27,5% denunció violencia física y el 11,4% violencia sexual.
- **PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD (EM-DG):** El 76,3% de mujeres se siente poco o nada segura en espacios públicos (calles, mercados, transporte). Ninguna mujer (0,0%) se siente muy segura. En el hogar, el 11,9% de mujeres se siente insegura comparado con el 6% de hombres.
- **CONOCIMIENTO Y USO DE SERVICIOS (EM-DG):** Solo el 23,7% de mujeres sabe exactamente

a dónde acudir en caso de violencia. El 20,3% conoce el SLIM (Servicio Legal Integral Municipal) y sabe dónde está. El 82,2% de mujeres no usó ningún servicio de atención en el último año. La evaluación de la FELCV es negativa para el 34% de quienes la usaron.

- **VIOLENCIA POLÍTICA (EM-DG):** Es el principal obstáculo para la participación de las mujeres (32,5% lo menciona). Existe un 71% de casos nacionales de acoso político (2025).

Participación política y percepción ciudadana sobre la gestión municipal: exclusión verificable

A pesar de la alta organización vecinal histórica, las mujeres están ausentes de los espacios de poder efectivo.

- **PARTICIPACIÓN ORGANIZATIVA (EM-DG):** El 70,3% de mujeres no participa en ninguna organización (vs. 56,6% hombres). Solo el 7,6% de mujeres participa en sindicatos (vs. 25,3% hombres). El 83,1% nunca ha tenido un cargo de representación.
- **PERCEPCIÓN DE EXCLUSIÓN MUNICIPAL (EM-DG):** El 80,5% de las mujeres siente que las autoridades las toman poco o nada en cuenta. El 82,2% cree que sus necesidades son poco o nada atendidas. Solo el 3,4% conoce algún programa municipal para mujeres.
- **AGENDA CIUDADANA PRIORITARIA (EM-DG):** Las mujeres demandan: 1) Apoyo en empleo e ingresos (62,6%); 2) Seguridad en espacios públicos (46,8%); 3) Atención a la violencia (40,4%). Los servicios de cuidado solo son mencionados por el 15,8% (lo que indica naturalización del cuidado como responsabilidad privada).
- **DÉFICIT DE PLANIFICACIÓN:** El PTDI 2021-2025 nombra la violencia como brecha, pero trata a las mujeres como “grupo vulnerable” o “madres cuidadoras”, sin reconocer su rol en la economía ni la necesidad de corresponsabilidad en los cuidados. No cuantifica el trabajo doméstico no remunerado (mandato del Art. 338 CPE).

Conclusiones y hallazgos estructurales

El diagnóstico identifica ocho hallazgos transversales que configuran un sistema de reproducción de la desigualdad:

1. **LA PRECARIEDAD LABORAL SE FEMINIZA Y RACIALIZA:** Las mujeres aymaras se concentran en el trabajo por cuenta propia (51,4%) y el comercio informal.
2. **EL CUERPO DE LAS MUJERES SOSTIENE LA ECONOMÍA DEL CUIDADO:** El 28,8% de mujeres dedica 5 o más horas diarias a cuidados; infraestructura pública casi inexistente (solo 2% considera suficientes las guarderías).
3. **LA AUTONOMÍA ECONÓMICA NO ES SOLO INGRESO, ES CAPACIDAD DE AGENCIA:** Generar ingresos precarios sin corresponsabilidad masculina ni estatal no se traduce en autonomía real.
4. **EL CUIDADO NO ESTÁ REDISTRIBUIDO:** Brecha de 8 a 1 en horas de cuidados entre mujeres y hombres. Incumplimiento de los Arts. 64 y 338 de la CPE.
5. **LA VIOLENCIA OPERA COMO CONTROL TERRITORIAL Y POLÍTICO:** 76,3% de mujeres inseguras en espacio público; violencia política como principal barrera de participación.
6. **MAYOR EDUCACIÓN FEMENINA NO MEJORA EMPLEO NI INGRESOS:** Persiste el sesgo androcéntrico en el mercado laboral.
7. **EXCLUSIÓN MUNICIPAL VERIFICABLE:** El 80,5% de mujeres se siente excluida; solo 3,4% conoce programas de género municipales.
8. **AGENDA CIUDADANA FEMINISTA CLARA:** Ley municipal de reconocimiento del trabajo no remunerado; fortalecimiento de SLIM, DNA y centros infantiles; presupuesto para empleo y prevención; participación en el nuevo PTDI 2026-2030.
9. El Alto cuenta con un marco normativo y constitucional favorable, pero la brecha entre el discurso y la práctica es profunda. La pregunta que queda abierta es si el nuevo gobierno municipal tendrá la voluntad política y presupuestaria para transformar las condiciones estructurales de desigualdad que este diagnóstico documenta.

Los hallazgos del diagnóstico apuntan a una conclusión central: las desigualdades de género en El Alto no son residuales ni se explican por factores individuales, sino que expresan el funcionamiento del orden patriarcal-colonial-capitalista en un territorio concreto. La agenda ciudadana que emerge del proceso participativo es clara, precisa y coherente con los nudos críticos identificados. Su traducción en políticas, presupuestos y compromisos institucionales es la tarea urgente del nuevo ciclo de planificación municipal 2026-2030.

ABREVIATURAS Y SIGLAS

CEDLA	Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario
CPMGA	Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza
CPE	Constitución Política del Estado
DNA	Defensoría de la Niñez y Adolescencia
EMD-G	Encuesta Municipal Digital sobre Desigualdades de Género
EPI	Estación Policial Integral
EUT	Encuesta de Uso del Tiempo
FELCV	Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia
FEJUVE	Federación de Juntas Vecinales
FGE	Fiscalía General del Estado
GAM	Gobierno Autónomo Municipal
GAMEA	Gobierno Autónomo Municipal de El Alto
IAP	Investigación Acción Participativa
IBCE	Instituto Boliviano de Comercio Exterior
ILE	Interrupción Legal del Embarazo
INE	nstituto Nacional de Estadística
NNA	Niñas, Niños y Adolescentes
OIT	Organización Internacional del Trabajo
PEA	Población Económicamente Activa
PLATFAM	Plataforma de Atención Integral a la Familia
PTDI	Plan Territorial de Desarrollo Integral
SLIM	Servicio Legal Integral Municipal
SUS	Seguro Universal de Salud
TGP	Tasa Global de Participación
TO	Tasa de Ocupación
UAPSE	Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas
VRG	Violencia en Razón de Género

I. INTRODUCCIÓN



El presente Diagnóstico de Desigualdades de Género del Municipio de El Alto es el resultado de un proceso de investigación feminista participativa encargado por el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA), en el marco del proyecto “Economías Transformadoras desde la Igualdad de Género y Feminismo”. Su producción responde a la necesidad de contar con información rigurosa, desagregada y políticamente útil para orientar la planificación municipal y fortalecer las estrategias de incidencia de las organizaciones de mujeres en El Alto.

El Alto es la segunda ciudad más poblada de Bolivia, la principal urbe aymara del continente y un territorio donde la desigualdad de género adquiere formas específicas, moldeadas por la articulación entre patriarcado, capitalismo y colonialidad. Con 885.035 habitantes, de los cuales el 51,76% son mujeres, El Alto concentra una economía popular densa, una historia de resistencia social protagonizada en momentos clave por las mujeres, y condiciones materiales que reproducen sistemáticamente las jerarquías del orden patriarcal-colonial. Comprender las desigualdades de género en este municipio exige, por tanto, una lectura interseccional que articule clase, etnia, territorio y género como categorías mutuamente constitutivas.

El diagnóstico realizado en el entorno metodológico de la Investigación Acción Participativa integra tres fuentes de información: la Encuesta Municipal Digital sobre Desigualdades de Género (EM-DG) aplicada a 203 personas (mujeres y hombres) en las áreas urbana y periurbana del municipio; fuentes primarias que incluyen talleres de Diagnóstico Participativo con más de 30 mujeres líderes de organizaciones de base, entrevistas semiestructuradas a servidores públicos del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) y dirigentes vecinales (hombres); y estadísticas oficiales del INE, UDAPE, la Fiscalía General del Estado y estudios de instituciones no gubernamentales. La triangulación analítica de las fuentes de información en cada una de las nueve dimensiones del Diagnóstico, permite reportar hallazgos que muestran el entrecruzamiento de los factores y sistemas de opresión y desigualdad en la vida de las mujeres, siempre en relación a sus pares masculinos.

El informe está organizado en cinco grandes secciones. La primera presenta el marco metodológico que orienta la producción del conocimiento. La segunda ofrece una aproximación sociodemográfica al municipio, incluyendo composición étnica, dinámicas de migración y contexto de pobreza e ingresos. La tercera sección, de mayor extensión, analiza las desigualdades de género en nueve dimensiones: sesgos en el mercado laboral, brechas de ingresos, precariedad y trabajo de cuidados, autonomía económica, servicios públicos, educación, salud, participación política y violencia en razón de género. La cuarta sección recupera la percepción ciudadana sobre la gestión y las políticas municipales contenidas en el PTDI 2021-2025 del GAMEA. El informe cierra con conclusiones que articulan los hallazgos en un perfil integrado de las desigualdades y con propuestas de las mujeres para la agenda del nuevo ciclo de planificación municipal 2026-2030.

En este marco, el diagnóstico se inscribe también en la trayectoria institucional del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, institución feminista sin fines de lucro fundada el 5 de marzo de 1983 por mujeres forjadas en la lucha por la democracia, cuyo trabajo se orienta al reconocimiento, exigibilidad, goce y ejercicio de los derechos de las mujeres y comprende los siguientes lineamientos estratégicos para su implementación:

- **FORMACIÓN:** Formar e informar sobre los derechos humanos, enfatizando sobre los derechos de las mujeres como el derecho a una vida libre de violencia, derechos sexuales y reproductivos, derechos políticos y derechos económicos relacionados a la capacitación técnica y gestión empresarial.
- **ASESORÍA:** Desarrollando diversos tipos de asesoramiento legal sobre derechos laborales, procesos judiciales en casos de violencia, asesoramiento en incidencia exigibilidad y control social, gestión empresarial y comercialización.
- **APOYO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA:** Participar en movilizaciones en fechas emblemáticos, apoyando las movilizaciones permanentes ante temas de agenda, e incidencia a los gobiernos municipales, buscando la implementación de políticas públicas en favor de los derechos de las mujeres.
- **COMUNICACIÓN:** Línea transversal a las otras Líneas y ámbitos de trabajo, mediante distintas metodologías, herramientas para la elaboración y difusión de material educativo y de comunicación.
- **GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO:** A través del “Centro de reflexión” destinado a obtener y difundir conocimiento basado en datos reales y/o aprendizajes institucionales que será aplicado a ambos ámbitos.

El proyecto Economías Transformadoras desde la Igualdad de Género y Feminismo, implementado con apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo en El Alto, Viacha y Achocalla, coloca precisamente en el centro la generación de propuestas, la exigibilidad de derechos y el reconocimiento del trabajo productivo y de cuidado de las mujeres. Por ello, la lectura de El Alto debe ser entendida como parte de una apuesta política mayor: traducir evidencia en agenda pública, y agenda pública en decisiones municipales verificables para el nuevo ciclo de planificación.

El análisis está anclado en un marco teórico feminista interseccional (del Feminismo del Sur Global) que pone en acción la función analítica de las categorías de género, patriarcado, división sexual del trabajo, del trabajo de regeneración y cuidado de la vida, etc. Las categorías de la economía feminista, y en particular los aportes de Rita Segato, María Lugones, Silvia Federici y la epistemología decolonial de Rivera Cusicanqui, informan tanto los modos de producir el conocimiento como la interpretación de los datos. El proceso participativo favoreció el intercambio de saberes y conocimientos de las mujeres participantes y del equipo de investigación.

II. METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN

El feminismo cuerpo teórico filosófico-político y práctica social enfatiza la dimensión política de la producción de conocimientos para la subversión del orden existente. El objeto de estudio en la investigación feminista, es el funcionamiento de las relaciones de poder entre los sexos y como estas configuran la situación y condición de los sexos en un entramado social articulado por tres sistemas de dominio; el patriarcado, el capitalismo y el racismo.

Son las categorías analítico-causales e interseccionales construidas por el feminismo, las que permiten identificar las desigualdades de género, entender sus causas/ raíces para avanzar en la transformación de las condiciones de desigualdad. En ese sentido, las categorías feministas que integran el marco teórico que sustenta la metodología desarrolla en la implementación del Diagnóstico de Desigualdades de Género en el municipio de El Alto son: la categoría género, patriarcado, división sexual del trabajo, trabajo de regeneración y cuidado de la vida, la interseccionalidad de género, la economía de los cuidados; y aportes de la economía feminista.

Las dimensiones/ ámbitos temáticos del Diagnóstico de Desigualdades de Género definidos junto al CPMGA son: participación económica, empleo, ingresos, acceso a servicios, educación, salud, violencia, participación política y trabajo de cuidados.

En ese marco, la metodológica desarrollada, combina la Investigación Acción Participativa (IAP) con elementos del análisis crítico provistos por la Educación Popular traducidos en las herramientas investigación, a saber: talleres de Diagnóstico Participativos sobre Desigualdades de Género; entrevistas semi estructuradas a informantes clave del gobierno municipal, entrevistas colectivas e individuales con mujeres líderes de organizaciones de base, herramientas cualitativas que profundizan la reflexión.

La información cuantitativa se ha colectado de dos fuentes; la Encuesta Municipal (digital) sobre Desigualdades de Género (EM-DG) aplicada durante el proceso de diagnóstico y estadísticas y reportes oficiales provenientes del INE, UDAPE, fiscalía general del Estado (FGE) y otras fuentes.

Con la aplicación de la Encuesta Municipal (digital) sobre Desigualdades de Género (EM-DG) se levantaron 203 registros válidos; encuestas distribuidas en área urbana (74.4%), periurbana (17.2%) y rural (8.4%), con sobrerrepresentación intencional de mujeres (118 mujeres, 83 hombres, 2 personas

Debido a las dificultades propias del proceso de transición gubernamental del GAM de El Alto, marcado por la desconfianza y confrontación entre actores políticos locales, no se logró instalar la mesa técnica y entrevista colectiva con servidores públicos del GAMEA, solo se desarrollaron cinco entrevistas semiestructuradas servidores públicos del GAMEA (Unidad de la Mujer, Unidad de Infancia y Adolescencia, Plataforma de Atención Integral a la Familia Distrito 1), una entrevista a referente de la Federación de Juntas Vecinales 6 de Marzo. En cambio, el taller participativo de reflexión y análisis contó con la participación de más de 30 mujeres representantes de organizaciones de mujeres y de diversidades sexuales.

En el análisis de la información y la construcción de hallazgos se ha desarrollado un proceso de triangulación entre las tres fuentes de información. Esta triangulación metodológica responde a la convicción de que el conocimiento sobre las desigualdades de género, requiere tanto de la voz y la experiencia de las propias mujeres como de datos que permitan dimensionar la magnitud del fenómeno de la desigualdad de género. Las tres fuentes no se presentan de manera secuencial sino convergente: para cada variable, mostramos cómo las cifras estructurales, los datos de la encuesta EM-DG y las voces de las mujeres y las instituciones se refuerzan mutuamente, construyendo una imagen triangulada de la desigualdad. Cuando existen tensiones o matices entre fuentes, los señalamos explícitamente; cuando convergen con fuerza, ese nivel de convergencia es en sí mismo un hallazgo político.

En el proceso participativo de investigación, los talleres y las entrevistas con mujeres lideresas, aparte de ser instrumentos para el recojo de información fortalecen las capacidades organizativas de las mujeres participantes, construye vínculos políticos entre organizaciones y actores/as municipales, mucho más allá de producción de conocimientos expresada en los hallazgos.

III. APROXIMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA AL MUNICIPIO DE EL ALTO

El Alto es la segunda ciudad más poblada de Bolivia y la principal urbe aymara del continente. Municipio predominantemente urbano, su trayectoria y dinámica social profundamente marcada por procesos de migración interna (principalmente de zonas rurales), la articulación con la economía minera[1], la insurrección de octubre de 2003, la consolidación de una economía popular de gran densidad, una población mayoritariamente joven, que sumadas a la presencia de formas organizativas comunitarias de participación imbricadas con la herencia del sindicalismo minero[2] constituyen las características centrales de este municipio, un municipio ch'ixi[3] mayoritariamente plebeyo.

De acuerdo a la información proporcionada por la Encuesta Digital de Desigualdades de Género (ED-DG), se evidencia la composición poblacional predominantemente aymara de El Alto.



1. El comercio de insumos, equipos y otros para la producción la producción minera de pequeña escala del norte amazónico y el altiplano norte del Departamento de La Paz, se desarrolla fundamentalmente en El Alto, así como la provisión de alimentos para los centros mineros.
2. En la primera década del Estado neoliberal (años 80), los despidos masivos de trabajadores mineros de la minería estatal generan un fuerte asentamiento urbano en el territorio de El Alto, que junto a otros/as obreras/os y campesinos/as desplazados del neoliberalismo, fundan la ciudad de El Alto a finales de la década de los años 80.
3. El concepto ch'ixi designa la condición de coexistencia indígena-mestiza que no produce mezcla sino tensión productiva entre contrarios. Rivera Cusicanqui, S. (2018). Un mundo ch'ixi es posible. Ensayos desde un presente en crisis. Tinta Limón. Buenos Aires.

La autoidentificación étnica refleja la matriz cultural del municipio. El 47,40% de la población alteña se autoidentifica como aymara, lo que convierte a este pueblo en mayoría étnica relativa de la jurisdicción. Esta característica no es accesoria: estructura los modos de organización familiar, los patrones de uso del territorio, la economía popular y las formas de violencia y resistencia. La interseccionalidad entre identidad aymara y condición de mujer produce posiciones específicas que el diagnóstico no puede reducir a la simple sumatoria de variables.

El Alto: Autoidentificación étnica de la población encuestada (EM-DG) y del Censo 2024 (INE)

AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA	EM-DG 2026 (N=203) %	CENSO INE 2024 %
Aymara	53,7	47,4
Mestiza/o	30,0	38,4
Otro / No especificado	16,3	14,2
TOTAL	100,0	100,0

Fuente: Construcción propia con datos Encuesta Municipal de Desigualdades de Género (Encuesta digital), CPMGA, abril 2026; e INE, Censo 2024, datos municipales de autoidentificación étnica.

La abrumadora presencia de la economía informal[4], evidenciada en las calles de El Alto, dan cuenta que la norma es la precariedad laboral y anticipa tensiones estructurales de la economía, el empleo, los ingresos, las políticas social, especialmente aquellos vinculados al cuidado de la vida (salud, educación, atención a niñez y personas adultas mayores), ámbitos donde históricamente las mujeres suplen las ausencias del Estado y hacen de este municipio un territorio para cualquier lectura sobre las desigualdades de género en Bolivia.

Según datos del INE es un municipio eminentemente urbano, el 99,9% del total de la población vive en estas áreas, mientras solo un 0,07% vive en las áreas rurales. El Alto cuenta con 885.035 habitantes, de las cuales 458.106 son mujeres (51,76%) y 426.929 son hombres (48,24%). La estructura poblacional es predominantemente joven.

4. De acuerdo al INE (2025), la informalidad laboral en Bolivia alcanzó aproximadamente 84.2% en 2024.

La producción de estadísticas sobre pobreza e ingresos es escasa y rezagada en el tiempo, sobre todo para el nivel municipal. Sin embargo, datos nacionales nos aproximan a la comprensión del contexto socio económico de El Alto. Al respecto, entre 2005 y 2024, Bolivia logró reducir la pobreza monetaria en 23 puntos porcentuales (del 60,6% al 37,6%) y la pobreza extrema del 38,2% al 12,8%, impulsado principalmente por un incremento de ingresos en los estratos más bajos. A pesar de estos avances, persisten brechas críticas por área geográfica, con una pobreza del 53,3% en el área rural frente al 31,3% en la urbana en 2024. Respecto al sexo, aunque las fuentes no brindan un índice de pobreza específico por género, destacan una marcada desigualdad de ingresos, donde las mujeres perciben menos que los hombres incluso con niveles educativos similares, además de enfrentar mayores barreras de acceso al empleo, conformando el 65,9% de la población inactiva y el 57,8% de las personas desocupadas al cierre del periodo analizado

En Bolivia, el ingreso del hogar per cápita real (expresado en bolivianos de 2016) para el año 2024 registra valores de Bs. 1.162 para el estrato medio vulnerable, Bs. 2.388 para el estrato medio no vulnerable y Bs. 5.839 para el estrato alto. Estos estratos se definen específicamente por su relación con la línea de pobreza moderada nacional: el estrato bajo (cuyo ingreso aumentó un 75% entre 2005 y 2024) comprende a quienes perciben menos de dicha línea; el medio vulnerable, entre 1 y 2 veces; el medio no vulnerable, entre 2 y 5 veces; y el estrato alto, ingresos superiores a 5 veces el valor de la línea. Durante el periodo 2005-2024, se observó una tendencia de crecimiento “pro-pobre”, donde los estratos medio vulnerable y medio no vulnerable incrementaron sus ingresos en 22% y 15% respectivamente, mientras que el estrato alto experimentó una reducción del 21% en su ingreso per cápita.

Es en este contexto sociodemográfico que comprendemos que las mujeres alteñas son sujetas políticas que han sostenido históricamente las luchas por la dignidad de sus barrios, el derecho a una vida digna, la soberanía sobre los hidrocarburos y más recientemente por la soberanía de los territorios y la soberanía y seguridad alimentaria y que, sin embargo, viven en condiciones materiales que reproducen, de manera sistemática, las jerarquías del orden patriarcal-colonial.

Movilidad y migración

El Alto es un municipio construido sobre la migración. Su historia urbana es la historia de miles de familias del altiplano paceño, los Yungas y otras regiones del país que llegaron buscando mejores condiciones de vida, acceso a servicios y oportunidades económicas. Esta condición de municipio receptor de migración interna define su composición demográfica, su economía y sus tensiones sociales; tiene una dimensión de género particular que las tres fuentes documentan de manera convergente: las mujeres

migran en mayor proporción por razones no agenciadas —matrimonio, decisión familiar— que por proyectos propios de movilidad económica o educativa.

Razón de migración según sexo

EL ALTO: RAZÓN DE MIGRACIÓN Y MOVILIDAD		
INDICADOR MIGRATORIO	MUJER	HOMBRE
Migró en los últimos 10 años	13,6	16,9
Razón: decisión familiar	37,5	—
Razón: matrimonio o unión de pareja	31,2	—
Razón: trabajo o empleo	12,5	—
Razón: falta de servicios en lugar de origen	12,5	—
Situación económica mejoró tras migrar	45,2	—
Situación económica se mantuvo igual	35,5	—
Situación económica empeoró	19,4	—
Posiblemente o sí piensa migrar (próximos 2 años)	37,3	37,3

Fuente: Construcción propia con datos Encuesta Municipal de Desigualdades de Género (Encuesta digital), CPMGA, abril 2026

El 15,3% de la muestra es migrante, migró a El Alto en los últimos diez años (13,6% de mujeres vs. 16,9% de hombres). La diferencia en tasas de migración es relativamente pequeña, pero las razones son radicalmente distintas: el 37,5% de las mujeres migrantes lo hizo por decisión familiar y el 31.2% matrimonio o unión de pareja, sumando el 68,7% por razones mediadas por proyectos familiares o de pareja, no propios. En contraste, el trabajo y el empleo como razón de migración alcanza apenas el 12,5% entre las mujeres. Esta asimetría en los motivos de migración tiene consecuencias directas sobre

sobre la autonomía en el lugar de destino: quien migra siguiendo a otro tiene menor capital social propio en el territorio, menor red de apoyo independiente y, por lo tanto, mayor dependencia del entorno familiar o de pareja al que se incorpora.

15,3% de la población migró a El Alto en los últimos años

13,6% mujeres **16,9% hombres**

El informe de campo contextualiza esta dinámica en el marco de la 'nueva ruralidad' alteña: muchas mujeres gestionan su vida en una continuidad geográfica entre la parcela rural de origen y la ciudad, alternando entre trabajo productivo y reproductivo en los dos espacios. Esta multiresidencia —que el municipio ni registra ni atiende específicamente— expone a las mujeres a una doble precariedad: precariedad rural en el lugar de origen y precariedad urbana en El Alto, sin que ninguno de los dos sistemas de protección social las cubra plenamente.

La narrativa migratoria es ambivalente: el 45,2% reportó que la razón de migración es por mejora económica tras migrar, el 35,5% en busca de "situaciones estables" y el 19,4% por que en su lugar de nacimiento la situación económica "empeoro". La intención migratoria futura es relativamente alta: el 37,3% de las mujeres alteñas considera la posibilidad de trasladarse en los próximos dos años, cifra que refleja tanto insatisfacción con las condiciones actuales como estrategia activa de movilidad. A diferencia de Viacha y Achocalla, donde el arraigo territorial es mayor, en El Alto la movilidad interna —especialmente hacia La Paz— aparece como alternativa considerada por una proporción importante de la población.

IV. DESIGUALDADES DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO

4.1. Sesgos de género[5] en el mercado laboral

Entre 2005 y 2024, Bolivia logró reducir la pobreza monetaria en 23 puntos porcentuales (del 60,6% al 37,6%) y la pobreza extrema del 38,2% al 12,8%, impulsado principalmente por un incremento de ingresos en los estratos más bajos. A pesar de estos avances, persisten brechas críticas por área geográfica, con una pobreza del 53,3% en el área rural frente al 31,3% en la urbana en 2024. Respecto al sexo, aunque las fuentes no brindan un índice de pobreza específico por género, destacan una marcada desigualdad de ingresos, donde las mujeres perciben menos que los hombres incluso con niveles educativos similares, además de enfrentar mayores barreras de acceso al empleo, conformando el 65,9% de la población inactiva y el 57,8% de los desocupados al cierre del periodo analizado.

En Bolivia, el ingreso del hogar per cápita real (expresado en bolivianos de 2016) para el año 2024 registra valores de Bs. 1.162 para el estrato medio vulnerable, Bs. 2.388 para el estrato medio no vulnerable y Bs. 5.839 para el estrato alto. Estos estratos se definen específicamente por su relación con la línea de pobreza moderada nacional: el estrato bajo (cuyo ingreso aumentó un 75% entre 2005 y 2024) comprende a quienes perciben menos de dicha línea; el medio vulnerable, entre 1 y 2 veces; el medio no vulnerable, entre 2 y 5 veces; y el estrato alto, ingresos superiores a 5 veces el valor de la línea. Durante el periodo 2005-2024, se observó una tendencia de crecimiento "pro-pobre", donde los estratos medio vulnerable y medio no vulnerable incrementaron sus ingresos en 22% y 15% respectivamente, mientras que el estrato alto experimentó una reducción del 21% en su ingreso per cápita.

5. El concepto de sesgos de género, refiere al impacto diferencial que las estructuras económicas y las políticas públicas tienen sobre las mujeres y los hombres, debido al funcionamiento de la división sexual del trabajo en la economía y al proceso de valorización del capital que rige todas las estructuras sociales y económicas. El sesgo de género en el mercado de trabajo se refiere a las diferencias sistemáticas y no justificadas por la productividad en el acceso a determinados sectores laborales, diferencias en trato, en las oportunidades, en la valoración y los resultados que experimentan hombres y mujeres dentro del ámbito laboral. A diferencia de la segregación ocupacional (que describe cómo se distribuyen), el sesgo de género se centra en los mecanismos discriminadores (a menudo implícitos o culturales) que producen y reproducen las desigualdades de género.

4.1.1. Características de la participación económica y el empleo en El Alto

El empleo en Bolivia se caracteriza por el altísimo porcentaje de informalidad. La tasa de empleo informal en el año 2024 alcanzó el 83,9% del empleo total; la situación es aún más grave entre las mujeres, con un 83% de ellas empleadas en la economía informal, frente al 78% de los hombres, según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) titulado "Panorama Laboral 2023"[6]. La misma fuente señala que Bolivia, duplica la tasa promedio de informalidad laboral por sexo de la región andina. Respecto a la participación de las mujeres en el comercio informal, con datos INE al 2024, el CEDLA[7] manifiesta que las mujeres están sobre representadas con el 83,2%.

De acuerdo con el INE, la informalidad laboral en Bolivia alcanzó aproximadamente 84,2% en 2024, según información derivada de registros y análisis de empleo, mientras que según estimaciones de la OIT e informes periodísticos señalan que la informalidad es ligeramente mayor para mujeres (86,5%) que para hombres (82,7%)[8].

Un acercamiento a nivel local, a partir de los datos municipales del Censo 2024 en El Alto, muestra que de las 172.794[9] personas que integran su Población Económicamente Activa (PEA), el 96% se encuentra ocupada. Esta cifra, aparentemente positiva, esconde tras de sí profundas desigualdades estructurales. Así lo revela también la Tasa Global de Participación (TGP): según el Censo 2012, la brecha entre hombres (73,86%) y mujeres (55,26%) era de 18,6 puntos porcentuales. Para 2024, esa distancia se ha acortado a 12,41 puntos, con una TGP femenina del 66,57% frente al 78,98% masculino, lo que evidencia avances, pero también la persistencia de una exclusión relativa de las mujeres del mercado laboral formal.

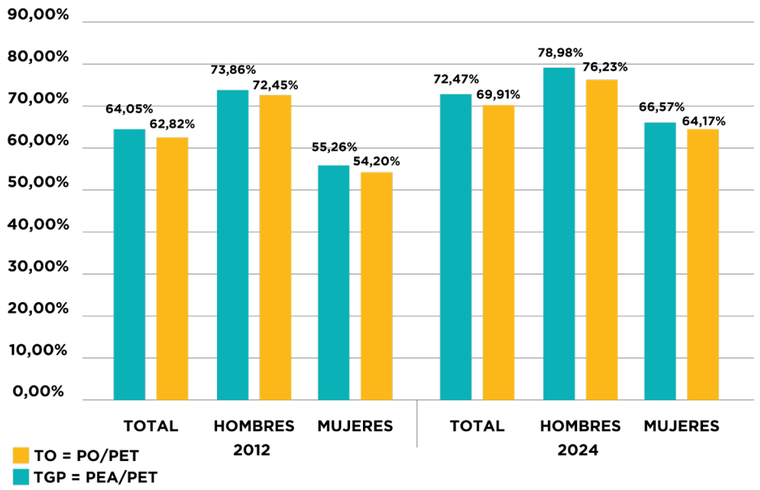
También según los datos del INE ya descritos, la Tasa Global de Participación (TGP), muestra una diferencia entre hombres (73,86%) y mujeres (55,26%) de 18,6 puntos porcentuales, según el CENSO 2012, esta diferencia, según el último CENSO (2024), se logra reducir a 12,41 puntos (con una TGP femenina del 66,57% frente al 78,98% masculino).

6. https://ciss-bienestar.org/2024/09/17/informe-de-la-oit-informalidad-laboral-en-bolivia-llega-al-80/
7. https://cedla.org/cedla-en-los-medios/el-pais-cedla-politicas-apuestan-por-el-empleo-informal
8. INE, I. N. (noviembre de 2025). ine.gob.bo. Obtenido de Estadísticas Sociales: https://www.ine.gob.bo/index.php/bolivia-poblacion-por-trimestre-segun-condicion-de-actividad-y-sexo-2015-2019-p/
9. Los datos que se muestran provienen del INE y la desagregación es municipal, cuando no sea de esta forma se especificará de donde proviene el dato.

Por otro lado, los datos a nivel municipal del INE muestran que esta inserción se da en condiciones de desigualdad. Si bien, la Tasa de Ocupación (TO[10]) femenina creció del 54,20% en 2012, al 64,17% en 2024, la Tasa de Ocupación (TO) masculina sigue superando a la femenina por más de 12 puntos. En el Gráfico N°1 se muestra que la TGP ha mejorado, pero la brecha entre mujeres y hombres ocupados es significativa, evidenciando, la presión que sufren las mujeres para entrar al mercado de trabajo, pero sin poder encontrarlo, es decir no es un incremento del nivel de mujeres ocupadas, sino un incremento de la presión por entrar en el mercado de trabajo.

Gráfico N°1

EA: EVOLUCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y OCUPACIÓN POR SEXO (2012 - 2024) (%)



Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales del INE (CENSO 2012 y 2024)

La encuesta EM-DG confirma y desagrega con precisión los patrones discriminatorios de la estructura económica clasista, patriarcal y racializada que configuran los sesgos de género en el mercado laboral identificados en las estadísticas oficiales.

10. Todos los datos de población y empleo/ocupación (PEA, PO, TDA,TO, PA, PI, TGP, PET, PENT) han sido extractados del INE, CENSO 2024 y las comparaciones se las realiza con los datos de los CENSOS anteriores, con la misma base de datos.

La tasa de participación económica de las mujeres alteñas (80,5%) supera la masculina (73,5%), dato aparentemente positivo que, sin embargo, se descompone de manera reveladora: mientras el 43,2% de las mujeres trabaja como cuenta propia frente al 28,9% de los hombres, estos últimos superan ampliamente la proporción de empleo asalariado en mujeres (37,3% comparado con 28,8%). Esto significa que, menos proporción de mujeres tiene menos posibilidades de acceso a salario mínimo, aguinaldo, seguro de salud y estabilidad; más si consideramos que la tasa de informalidad y precarización del empleo supera el (80%), donde el trabajo por cuenta propia es el más precarizado. Las y los encuestados dan cuenta también, que en la categoría de trabajador/a familiar sin remuneración el porcentaje de mujeres es dos veces más que el de los hombres.

80,5% tasa de participación femenina

73,5% tasa de participación masculina

EL ALTO: POBLACIÓN OCUPADA POR CATEGORÍA OCUPACIONAL Y SEXO (N Y %)

CATEGORÍA OCUPACIONAL	SEXO							
	MUJER		HOMBRE		NO BINARIO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Asalariada/o	34	28,8	31	37,3	1	50	66	32,5
Cuenta propia / trabajadora/or independiente	51	43,2	24	28,9	1	50	76	37,4
Empleadora/or	2	1,7	3	3,6	0	0	5	2,5
Trabajadora/or familiar sin remuneración	5	4,2	2	2,4	0	0	7	3,4
Otra	2	2,5	1	1,2	0	0	4	2
Sin dato / No responde	23	19,5	22	26,5	0	0	45	22,2

TOTAL	118	58,1	83	40,9	2	1	203	100

Fuente: Construcción propia con datos Encuesta Municipal de Desigualdades de Género (Encuesta digital), CPMGA, abril 2026

Los datos de la EM-DG muestran que la distribución de la población ocupada remunerada por rango de edad es más homogénea para los hombres, en tanto que las mujeres presentan una distribución por edad menos homogénea. La población ocupada de mujeres se concentra en las edades de 15 a 24 años con el 22,9% y de 35 a 44 años con igual porcentaje, en los hombres las edades que concentran mayor porcentaje de ocupados remunerados son de 35 a 44 años con el 14,5% y de 45 a 54 años con el 20,5%.

EL ALTO: POBLACIÓN OCUPADA REMUNERADA POR SEXO Y RANGO DE EDAD (N Y %)

EDAD	SEXO							
	MUJER		HOMBRE		NO BINARIO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
15–24 años	27	22,9	11	13,3	1	50	39	19,2
25–34 años	19	16,1	9	10,8	1	50	29	14,3
35–44 años	27	22,9	12	14,5	0	0	39	19,2
45–54 años	9	7,6	17	20,5	0	0	26	12,8
55–64 años	8	6,8	8	9,6	0	0	16	7,9
65 años o más	5	4,2	4	4,8	0	0	9	4,4
TOTAL	95	80,5	61	73,5	2	1	158	77,8

Fuente: Construcción propia con datos Encuesta Municipal de Desigualdades de Género (Encuesta digital), CPMGA, Abril 2026.

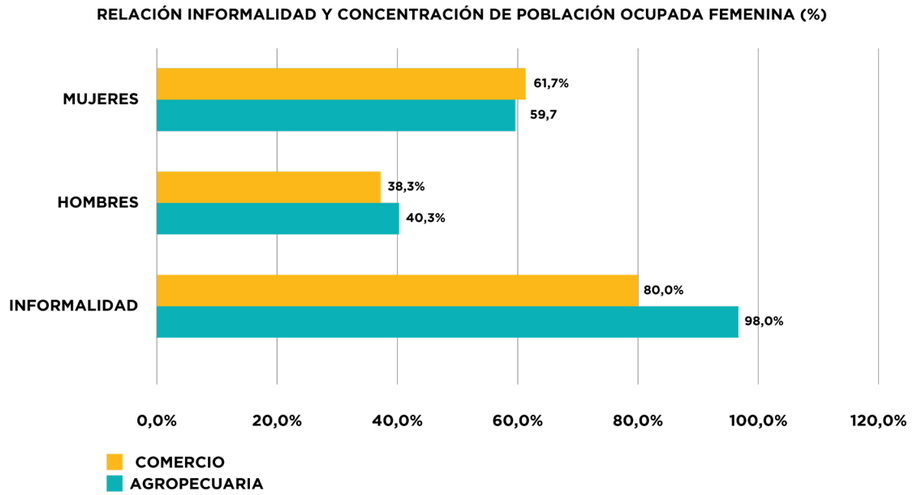
El empleo de las mujeres en Bolivia en general y en El Alto en particular, se concentra en el "empleo informal"[11] el cual, según el estudio nacional de (UDAPE, 2022), alcanzaría al 78% en 2021 y la OIT lo proyecta en un 82,3% para el año 2025. La informalidad no es solo la ausencia de registros, técnicamente significa la privación de derechos laborales básicos como el salario mínimo, aguinaldos y seguridad social.

El empleo en El Alto descansa sobre comportamientos típicos de la estructura económica en Bolivia, caracteriza por la presencia de sesgos de género que estructuran el mercado laboral. Este funcionamiento típico del mercado de trabajo en el municipio da cuenta que las mujeres están sobre representadas en sectores y ocupaciones de menor calificación laboral, bajos ingresos y en general altamente precarizados, como es el caso del sector de comercio, servicios y en la agricultura familiar de pequeña escala. Sectores en los que la seguridad social es prácticamente ausente y la vulneración del conjunto de derechos laborales una constante.

Relacionando los datos del estudio de informalidad de UDAPE, con los datos obtenidos del INE sobre ocupación por actividad económica (CENSO, 2024) se puede concluir que, en este municipio, la precarización laboral se feminiza. Al observar los sectores donde se concentran las mujeres trabajadoras de El Alto, Comercio (60%) y Agropecuario (61%), tienen tasas de informalidad altas, del 78%[12] y el 95% de informalidad respectivamente.

11. Se asume el criterio utilizado por UDAPE, que es el de la OIT (La economía informal y el trabajo decente, OIT 2013), sobre "empleo informal", "sector informal" y "economía informal": El "empleo informal" incluye todo trabajo remunerado (tanto autoempleo como empleo asalariado) que carece de protección laboral. La economía informal abarca todas las actividades económicas realizadas por las y los trabajadores y las empresas que no están, o están insuficientemente, cubiertas por las regulaciones formales (leyes fiscales, laborales, de seguridad social, etc.). El sector informal se define por el tipo de unidad productiva en la que trabaja una persona. Se caracteriza por ser un conjunto de empresas y/o unidades económicas que operan fuera del marco regulatorio estatal.
12. Según el estudio de (UDAPE, 2022)

Gráfico N°2



Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales del INE (CENSO 2012 y 2024) y (UDAPE, 2022)

Según datos municipales del CENSO 2024, muestran que el comercio es la actividad principal del municipio, de las 130.311 personas ocupadas en este sector, 80.000 son mujeres (62%), mientras que solo 49.000 son hombres, del total de ocupados en el sector agropecuario, de El Alto el 60% de la fuerza laboral es femenina.

La encuesta EM-DG, descompone a mayor detalle la ocupación por sector económico permitiendo ver de qué actividades económicas está compuesto el sector económico y en qué condiciones se desarrollan esos trabajos, así por ejemplo en el sector económico "comercio" el 35,6% de mujeres trabaja en "puestos de mercado", generalmente en la calle a la intemperie, desprovistos de infraestructura física y expuestas a violencias típicas de la calle (como accidentes de tránsito), en "tiendas" alojadas en los mercados callejeros o en pequeñas tiendas de barrio. Parte de ese porcentaje de mujeres ocupadas en el comercio minorista son las "ambulantes" mujeres que caminan por las calles comerciales cargadas de todo tipo de mercaderías, en el mejor de los casos y seguramente con mucho esfuerzo tienen un

"carrito" que empujan paso a paso anunciando los productos que ofrecen, su cuerpo y su vos son mayoritariamente sus herramientas de trabajo, se puede decir que están en lo más bajo de la escala de comerciantes. El 18,1% de los hombres ocupados también lo hace en esas condiciones del comercio minorista: la calle, caminando y algunos pocos en tiendas.

EL ALTO: POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR ECONÓMICO Y SEXO (N Y %)

SECTOR	SEXO							
	MUJER		HOMBRE		NO BINARIO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Comercio (mercado, tienda, ambulante)	42	35,6	15	18,1	1	50	58	28,6
Transporte	7	5,9	14	16,9	0	0	21	10,3
Agricultura / ganadería / actividad rural	3	2,5	4	4,8	0	0	7	3,4
Servicios (limpieza, cocina, cuidados)	3	11	1	1,2	0	26	14	6,9
Manufactura / artesanía / costura	5	4,2	9	10,8	0	0	14	6,9
Construcción	0	0	4	4,8	0	0	4	2
Educación	3	2,5	3	3,6	0	9	6	3
Salud	1	0,8	0	0	0	0	1	0,5
Servicios públicos	3	2,5	1	1,2	0	0	4	2
Otro	18	15,3	10	12	1	50	29	14,3

Sin dato / No responde (1)	23	19,5	22	26,5	0	0	45	22,2
TOTAL	118	58,1	83	40,9	2	1	203	100

(1) Incluye personas que no declararon sector; puede corresponder a personas que no trabajan o no respondieron.
Fuente: Construcción propia con datos Encuesta Municipal de Desigualdades de Género (Encuesta digital), CPMGA, abril 2026

De las personas no binarias encuestadas, el 50% está ocupada en el sector de comercio. Cerca del 6% de las mujeres encuestadas trabaja en el transporte y un 16% de hombres, el transporte es un sector fundamentalmente masculino. La EM-DG reporta que, en el sector de la manufactura es la artesanía y la confección el 10,8% de la ocupación masculina y solo el 4,2% de mujeres.

Otra fuente importante de empleo para las mujeres en El Alto es el sector de servicios, según la EM-DG el 11% de las mujeres está ocupada en servicios de limpieza, cocina y cuidados frente al 1,2% de los hombres ocupados en estas actividades.

El detalle de la estructura ocupacional por sector económico y sexo ratifica la misma es sexuada, el sexo como categoría de división y desigualdad demuestra su función normativa en la estructura del mercado laboral, son las mujeres y lo feminizado (en este caso las personas no binarias) están sobre representadas en las ocupaciones más precarias. Sin que esto signifique la ausencia de precarización laboral de los hombres.

Los datos oficiales ratifican estas características del mercado laboral. Los datos (INE CENSO 2024), por categoría de ocupacional, para este municipio, exponen que el trabajo por Cuenta Propia, es la categoría predominante con 212.621 personas, distribuida en un mayor porcentaje en mujeres (110.799) que en hombres (101.822), con porcentajes de 51% y 47% respectivamente. Esta categoría se asocia con mayor inestabilidad y falta de protección social. Según la OIT, el aumento del cuentapropismo en la región (América Latina y el Caribe) "...ha actuado como un amortiguador en contextos de insuficiente demanda de empleo asalariado y, en promedio, tiende a concentrarse en ocupación de menor productividad, con altos niveles de informalidad y mayor precariedad" (OIT, 2025, pág. 32). Como establece la OIT, esta categoría suele carecer de protección social y estabilidad laboral.

La población que se autoidentifica como Aymara, marca su presencia en el empleo, que visto desde la categoría ocupacional expresa la condición de precariedad laboral en la que se concentra, evidenciando

que los sesgos de género no son las únicas desigualdades del mercado de trabajo. El 51, 4% de la población que se autoidentifica como aymara es trabajadora/or por cuenta propia frente al 21,3% de población con autoidentificación mestizo/a y el 21,2% de otros; en la categoría de empleadora/or 4,9% son mestizos frente al 1,8% de aymaras. Evidenciando esa composición racializada del mercado laboral, que precariza a las poblaciones que constituyen la base social de la economía alteña.

POBLACIÓN OCUPADA POR CATEGORÍA OCUPACIONAL Y AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA (N Y %)

CATEGORÍA OCUPACIONAL	PERTENENCIA ÉTNICA							
	AYMARA		MESTIZA/O		OTRO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Asalariada/o (trabaja para alguien y recibe salario)	26	23,9	28	45,9	12	36,4	66	32,5
Cuenta propia / trabajadora/or independiente	56	51,4	13	21,3	7	21,2	76	37,4
Empleadora/or (tiene personas a su cargo)	2	1,8	3	4,9	0	0	5	2,5
Trabajadora/or familiar sin pago	4	3,7	1	1,6	2	6,1	7	3,4
Otra	0	0	3	4,9	1	3	4	2
Sin dato / No responde	21	19,3	13	21,3	11	33,3	45	22,2
TOTAL	109	53,7	61	30	33	16,3	203	100

Fuente: Construcción propia con datos Encuesta Municipal de Desigualdades de Género (Encuesta digital), CPMGA, Abril 2026

El orden patriarcal, capitalista y colonial se expresa con claridad en esta estratificación: ser mujer y ser aymara en El Alto significa, en términos estadísticos, mayor concentración en las formas más precarias e informales de inserción económica.

4.2 Desigualdad en ingresos

En el país la producción de estadísticas oficiales sobre brechas de género en ingresos son escasas y poco frecuentes. Una aproximación a la cuestión de los ingresos y las desigualdades de género es proporcionada por el estudio "Brechas Sociales en Bolivia: Un Análisis de la Desigualdad en Cifras (2005-2024)" elaborado por UDAPE (2025). Respecto al Ingreso Laboral [13]el promedio a nivel nacional para el año 2024 alcanza a Bs. 1.309 (expresado en bolivianos constantes de 2016). Al desagregar por área geográfica, el ingreso es de Bs. 1.458 en el área urbana y Bs. 959 en el área rural. Este tipo de ingresos es el componente principal del ingreso de los hogares, representando aproximadamente el 80% del total de sus ingresos mensuales, el 20% restante está conformado por ingresos no laborales.



El cuadro siguiente, presenta la distribución de la población y los niveles de ingreso por estrato socioeconómico[14] en Bolivia, utilizando los datos preliminares para el año 2024 expresados en bolivianos constantes de 2016.

ESTRATO	POBLACIÓN (EN MILLONES)	POBLACIÓN (%)	INGRESO MENSUAL PER CÁPITA 2024 (BS DE 2016)	DEFINICIÓN DEL ESTRATO
Bajo	4,66 millones	37,6	Bs. 908,6	Inferior a la línea de pobreza moderada
Medio Vulnerable	4,46 millones	36,0	Bs. 1.162	Entre 1 y 2 veces la línea de pobreza
Medio No Vulnerable	2,87 millones	23,2	Bs. 2.388	Entre 2 y 5 veces la línea de pobreza
Alto	0,40 millones	3,2	Bs. 5.839	Superior a 5 veces la línea de pobreza

Fuente: construcción propia en base a datos INE (2024) y UDAPE (2025) en Brechas Sociales en Bolivia

13. Los ingresos laborales se refieren a ingresos por trabajo con relación de dependencia y trabajo independiente
14. La determinación del estrato socioeconómico, según el estudio citado, se calcula empleando el umbral la canasta básica de alimentos como la métrica fundamental para identificar a la población en situación de pobreza

De acuerdo al boletín "Bolivia: Cifras de la Mujer" del Instituto de Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) con datos del INE, la brecha salarial entre hombres y mujeres del sector privado, para el año 2024, es en promedio nacional del 9% desfavorable para las mujeres, esto significa que en promedio nacional las mujeres tienen un salario 9% menor que los hombres por el mismo trabajo o trabajo de igual valor. La desigualdad salarial refleja las barreras que las mujeres continúan enfrentando para alcanzar la igualdad en el mundo del trabajo. De acuerdo al boletín "Bolivia: Cifras de la Mujer" del Instituto de Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) con datos del INE, la brecha salarial entre hombres y mujeres del sector privado, para el año 2024, es en promedio nacional del 9% desfavorable para las mujeres, esto significa que en promedio nacional las mujeres tienen un salario 9% menor que los hombres por el mismo trabajo o trabajo de igual valor. La desigualdad salarial refleja las barreras que las mujeres continúan enfrentando para alcanzar la igualdad en el mundo del trabajo[15].

Según datos del INE, de salario medio nominal del sector privado[16], por sexo y grupo ocupacional para el periodo, 2017 – 2025, la brecha salarial entre hombres y mujeres es más grande en el sector de extracción de minerales que ha incrementado la brecha de Bs. 592 en 2021 a Bs. 850 en 2025. Los sectores que han reducido o mantenido la brecha de género, en el periodo de referencia, son: servicios de intermediación financiera que ha reducido su brecha de Bs. 1350 en 2021 a Bs. 1185 en 2025 y los servicios sociales y de salud cuya brecha se ha visto levemente incrementada, de Bs. 1160 en 2021 a Bs. 1169 en 2025.

En cuanto a las desigualdades de género identificadas en la remuneración económica, según el estudio UDAPE[17] (2025) , persiste una desigualdad estructural de ingresos, las mujeres perciben remuneraciones menores que los hombres incluso contando con niveles educativos equivalentes. A nivel nacional, para el año 2023, en el estrato de educación superior (13 años de estudio o más), los varones obtenían ingresos laborales sistemáticamente más altos que las mujeres. Aunque la población femenina ha logrado avances significativos en sus años promedio de escolaridad, esto no se ha reflejado en una paridad salarial. La fuente sugiere que la obtención de mayores ingresos sigue siendo desproporcionadamente favorable para los hombres, lo que indica que la inercia estructural del mercado laboral prevalece sobre los logros educativos alcanzados por las mujeres.

En el marco de las características de los ingresos a nivel nacional, donde la precariedad y las brechas de género son el componente central, la encuesta EM-DG da cuenta de las particularidades de la desigualdad y la brecha de género de ingresos.

15. https://ibce.org.bo/publicaciones-ibcecifras-pdf.php?id=1296
16. El sector privado en la clasificación de empleo del INE incluye el denominado sector informal y trabajo por cuenta propia
17. UDAPE "Brechas Sociales en Bolivia: Un Análisis de la Desigualdad en Cifras (2005-2024)", 2025

EL ALTO: RANGO DE INGRESOS POR CATEGORÍA OCUPACIONAL								
RANGO DE INGRESOS MENSUALES	CATEGORÍA OCUPACIONAL							
	ASALARIADA/O		CUENTA PROPIA/ TRABAJADORA/OR INDEPENDIENTE		EMPLEADORA/OR		OTRA (PREFIERE NO DECIR)	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sin ingreso	0	0,0	1	1,3	0	0,0	0	0,0
Menos de Bs. 500	5	7,6	4	5,3	0	0,0	0	0,0
Bs. 500 – 1.000	15	22,7	11	14,5	0	0,0	3	75,0
Bs. 1.001 – 2.000	5	22,7	24	31,6	0	0,0	1	25,0
Bs. 2.001 – 3.000	12	18,2	21	27,6	1	20,0	0	0,0
Bs. 3.001 – 3.500	7	10,6	9	11,8	0	0,0	0	0,0
Más de Bs. 3.500	12	18,2	6	7,9	4	80,0	0	0,0
No responde	2	28,6	2	28,6	2	28,6	0	0,0
TOTAL	68		78		7		4	

Fuente: Construcción propia con datos Encuesta Municipal de Desigualdades de Género (Encuesta digital), CPMGA, abril 2026

Del total de las y los encuestadas/os en el municipio de El Ato el 10,83% declara tener un ingreso mensual superior a Bs. 3.500, el 36,94% de los ocupados declaran que su ingreso mensual no supera los Bs. 2.000. En el tramo de ingresos mensuales de Bs. 1.001 a Bs. 2.000 los y las trabajadores de la categoría cuenta propia / trabajadora/or independiente presentan el mayor porcentaje 31,6%.

En el municipio de El Alto, según los datos del INE (2024), el 33,79% de mujeres alcanzó el nivel de educación superior, mientras que un 33,53% de hombres alcanzó este nivel. Sin embargo, como ocurre en el nivel nacional, esta mejora del porcentaje de logro educativo de las mujeres contrasta con la concentración de la ocupación femenina (60% de mujeres) en empleos precarios, de bajos ingresos. Advirtiendo de esta manera la presencia del sesgo androcéntrico en el mercado laboral y los ingresos.

4.3 La precariedad laboral, de ingresos y el trabajo de cuidados

Para las mujeres responsabilizadas socialmente de la reproducción de la fuerza de trabajo y el cuidado de la familia por la división sexual del trabajo, la cuestión del trabajo de generación de ingresos no está separa de los trabajos de regeneración y cuidado de la vida, como lo hacen las estadísticas y en general la economía neoclásica imperante. Esta comprensión del trabajo total les permite identificar y analizar que las desigualdades en el empleo y los ingresos se originan en invisibilidad y no reconocimiento del trabajo de regeneración y cuidado de la vida que desarrollan en el hogar.

TRABAJO DOMÉSTICO Y DE CUIDADOS:

6 h 10 min diarios mujeres

3 h 19 min diarios hombres

De acuerdo a la Encuesta de Uso del Tiempo realizada por el CEDLA en ciudades capitales y El Alto (2023), las mujeres emplean 06:10 hs día en trabajos del hogar y de cuidados, frente a las 03:19 día que los hombres destinan a este trabajo.

Participación y tiempo diario promedio en actividades de trabajo total, según sexo (en porcentaje y tiempo diario promedio)

GRANDES GRUPOS DE ACTIVIDAD	PARTICIPACIÓN (%)			TIEMPO DIARIO PROMEDIO (HH:MM)		
	TOTAL	♂ HOMBRE	♀ MUJER	TOTAL	♂ HOMBRE	♀ MUJER
Trabajo Total	96,1	95,0	97,1	09:38	09:10	10:02
Trabajo Remunerado	50,3	55,6	45,8	09:26	10:21	08:28
Trabajo en la ocupación	47,1	55,0	40,1	08:55	09:27	08:18
Trabajo de autoconsumo	4,9	0,6	8,6	02:26	01:58	02:28
Traslado	30,1	36,6	24,4	01:26	01:28	01:23
Trabajo no remunerado	92,2	89,0	95,1	04:53	03:19	06:10
Trabajo doméstico/1	90,3	86,0	94,1	03:44	02:38	04:37
Trabajo de cuidados/1	41,1	32,5	48,7	02:31	01:51	02:54
Trabajo para la comunidad	2,4	2,6	2,6	03:56	03:22	04:33

Fuente: Encuesta de Uso del Tiempo (EUT) CEDLA 2023

Esas 06:10 horas es sentida por las mujeres alteñas, participantes del taller de Diagnóstico Participativo, como trabajo permanente sin descanso, extenuante, de mucha presión y responsabilidad, sin horario fijo; por eso, hablan de un trabajo de 24 hs.

Las 03:19 hs día que emplean los hombres en trabajos de cuidado, es evidenciado por las participantes del taller en el listado de actividades diarias realizadas por los hombres en el hogar: aseo personal,

alimentarse, salir a trabajar y/o estudiar, algunos realizan arreglos en la casa (plomería, electricidad, etc.), supervisión a hijas, hijos, hijes; pocos hombres apoyan en el cuidados de hijos/as, descanso (TV, celular), muchos hombres “hacen viernes de soltero” y muchos más “domingo de deporte”. Destacan dos actividades realizadas por los hombres que, no aparecen en el listado de actividades de la jornada día de las mujeres, el descanso, la supervisión y la recreación. Esa distinción entre supervisar y cuidar anuncia el ejercicio del poder patriarcal cotidiano y naturalizado en el hogar que deriva en privilegios sistémicos entre ellos: el descanso, la recreación, el acceso al trabajo y a mejores trabajos e ingresos que las mujeres y fundamentalmente el privilegio de “uso del tiempo”.

Las mujeres participantes del taller de Diagnóstico Participativo sobre la situación de las mujeres en el municipio de El Alto, nombraron la precariedad económica y la división sexual como estructurante de esa precariedad con una claridad política que las cifras no pueden capturar del todo. ‘Muchas alteñas trabajan, la mayoría son gremialistas/trabajadoras por cuenta propia (comerciantes) con ingresos limitados’, señalaron, añadiendo de inmediato que esa situación -refiriéndose a los ingresos limitados- ‘se agrava por la doble o triple jornada laboral, donde las actividades económicas se combinan con el trabajo regeneración y cuidados de la vida en términos de incremento de la jornada laboral total y con la persistencia de múltiples formas de violencia.

La descripción de una jornada ordinaria de trabajo para las mujeres —que incluye preparar alimentos, limpiar, cuidar hijas e hijos, apoyar en tareas escolares, hacer compras, atender el puesto de venta y participar en actividades comunitarias— configura lo que ellas mismas llamaron ‘una jornada de más de 24 horas’. Esa expresión no es hipérbole: es la síntesis política de una organización social del trabajo que extrae valor del cuerpo y del tiempo de las mujeres sin reconocimiento ni retribución.
En esta extensa jornada de trabajo total, el “puesto de venta” se convierte en una extensión del hogar. Dado que el 62% del sector comercio en El Alto es femenino, las mujeres cuidan, alimentan, apoyan las tareas escolares de sus hijos/as en las ferias y mercados.

En contraste, el trabajo de los hombres aparece principalmente vinculado al empleo remunerado, con participaciones ocasionales en tareas domésticas, generalmente en calidad de “apoyo” y no como corresponsabilidad. Esta diferenciación no solo da cuenta de una distribución desigual del trabajo, sino también de un orden simbólico que naturaliza que el cuidado sea una responsabilidad de las mujeres.

Brechas cuantificadas en trabajos de cuidados, para El Alto

EL ALTO: RANGO DE INGRESOS POR CATEGORÍA OCUPACIONAL		
INDICADOR DE CUIDADOS	MUJER	HOMBRE
Menos de 2 horas/día en cuidados	27,1	74,7
2 a 4 horas/día en cuidados	44,1	21,7
5 a 7 horas/día en cuidados	16,9	1,2
8 horas o más/día en cuidados	11,9	2,4
Total 5 horas o más/día	28,8	3,6
Principal responsable del cuidado en el hogar	48,3	20,5
Cuidado repartido equitativamente con la pareja	6,8	1,2
Con personas dependientes a cargo (menores, enf., AM)	44,9	21,7

Fuente: Construcción propia con datos Encuesta Municipal de Desigualdades de Género (Encuesta digital), CPMGA, abril 2026

Los datos de la encuesta EM-DG para El Alto especifican los hallazgos nacionales con una contundencia estadística que merece atención política. El 28,8% de las mujeres alteñas dedica cinco o más horas diarias al trabajo de cuidados, frente al 3,6% de los hombres: una brecha de casi ocho a uno. Si expresamos esta cifra en tiempo semanal, significa que tres de cada diez mujeres alteñas dedican 35 o más horas semanales al trabajo de cuidados no remunerado, equivalente a una jornada laboral completa que el sistema ni reconoce, ni retribuye.

La distribución intrahogar es igualmente elocuente: el 48,3% de las mujeres se identifica como principal responsable del cuidado en su hogar, frente al 20,5% de los hombres. Solo el 6,8% de las mujeres y el 1,2% de los hombres reporta una distribución equitativa del cuidado en la pareja; la corresponsabilidad, mandato constitucional según el Artículo 64 de la CPE, es todavía más discurso que práctica en El Alto. El 44,9% de las mujeres tiene personas dependientes a su cargo (menores de 5 años, personas enfermas o adultas mayores), frente al 21,7% de los hombres; la asimetría en la identificación de dependientes revela no solo quién cuida, sino quién asume subjetivamente la responsabilidad de ese cuidado.

Estas percepciones permiten enunciar la persistencia de una organización social del cuidado de carácter familista y patriarcal, donde el Estado y la comunidad tienen una participación limitada, en otras palabras, el cuidado asentado en el cuerpo de las mujeres.

Más sobre los trabajos de cuidados

El trabajo de regeneración y de cuidados de la vida comprende todas las actividades necesarias para sostener la vida cotidiana: alimentar, limpiar, criar, acompañar, cuidar personas enfermas y personas adultas mayores. Es un trabajo mayoritariamente no remunerado e invisible en las cuentas nacionales, pero indispensable para la reproducción social. Desde la economía feminista, el trabajo de cuidados se define como el conjunto de actividades destinadas a la sostenibilidad de la vida.

El debate feminista sobre el trabajo doméstico dio lugar a la promoción del concepto de “economía del cuidado”. En un sentido amplio, el contenido del concepto refiere a todas las actividades y prácticas necesarias para la supervivencia cotidiana de las personas en la sociedad en que viven. El cuidado permite atender las necesidades de las personas dependientes, por su edad o por sus condiciones/capacidades (niños y niñas, personas mayores, enfermas o con algunas discapacidades) y también de las que podrían auto proveerse dicho cuidado (Rodríguez, 2015).

Diane Elson (2001) propone el marco analítico de las tres “R”, que busca transformar la organización social del cuidado:

- **RECONOCER:** Dar visibilidad al valor económico y social del trabajo de cuidado no remunerado, así como a quién lo realiza (principalmente mujeres) y su magnitud.
- **REDUCIR:** Aliviar la carga excesiva y los largos tiempos que las mujeres dedican a estas tareas, mediante la provisión de infraestructura y servicios básicos (agua, electricidad, gas,

transporte) que agilicen el trabajo doméstico, así como servicios de cuidado públicos y de calidad (escuelas, centros de cuidados para NNA, centros de día para cuidado de personas adultas mayores, centros públicos recreacionales, etc).

- **REDISTRIBUIR:** Superar la actual organización "familista" y patriarcal, donde el cuidado recae desproporcionadamente en las mujeres dentro de las familias. La redistribución busca que el Estado, la comunidad y los hombres asuman una parte equitativa de la responsabilidad. Este punto es central para lograr la corresponsabilidad social y de género en el cuidado de la familia.

El trabajo de cuidados, en el marco de la corresponsabilidad del cuidado, esta incorporado en la Constitución Política del Estado (CPE) incorpora dos disposiciones fundamentales:

- **ARTÍCULO 64:** Establece que la atención, educación y formación integral de hijas e hijos es responsabilidad compartida de madres y padres en igualdad de condiciones.
- **ARTÍCULO 338:** Reconoce el valor económico del trabajo del hogar como fuente de riqueza y dispone su cuantificación en las cuentas públicas, en coherencia con el enfoque de la Economía del Cuidado.



A pesar de este mandato constitucional, los censos de 2012 y 2024 no incorporaron preguntas específicas para medir el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, lo que limita la disponibilidad de datos oficiales para su valoración económica. De la misma forma las cuentas nacionales no registran el aporte económico del trabajo de cuidados, como mandata el artículo 338 de la CPE.

El municipio de El Alto presenta una dinámica de cuidados caracterizada por una interacción permanente en la relación rural-urbana[18]. Se puede observar un fenómeno de "multiresidencia" y "pluriactividad" (Soriano & Sostres, 2025, pág. 11), donde las mujeres madres gestionan el sostenimiento de la vida alternando entre labores productivas —como el comercio, el pastoreo o el turismo— y responsabilidades reproductivas asignadas socialmente, en un continuo geográfico que enlaza la parcela agrícola con la ciudad.

18. Noción que hace referencia a la "nueva ruralidad" entendida por el documento de Gregoria Apaza, en que estos espacios son producto de una interacción más o menos constante entre el área urbana y rural.

La organización de los cuidados en El Alto se rige bajo un enfoque que ratifica la centralidad de la mujer como "cuidadora por esencia", organización que debido a la desigualdad económica introduce nuevos problemas como la inseguridad ciudadana. Adicionalmente, en El Alto se deberá considerar otra característica más de la organización de los cuidados: La dimensión urbano-rural específica de El Alto. Las mujeres que habitan los distritos con mayor vínculo rural gestionan el sostenimiento de la vida en una continuidad geográfica que enlaza la parcela con la ciudad, combinando trabajo productivo y reproductivo en un continuo sin pausas. En estos contextos, los trabajos de cuidado incluyen no solo la atención a personas sino también el resguardo de animales, la tierra y los bienes comunes —agua, semillas—, lo que añade dimensiones que la política municipal ni registra ni aborda.

La inseguridad ciudadana impacta diferencialmente a las mujeres, incrementa el trabajo de cuidados y reduce la disponibilidad de tiempo libre para las mujeres. En el ámbito alteño las madres consideran imperativo custodiar el desplazamiento de sus hijos, hijas, hijes (incluso adolescentes), lo que les demanda una inversión adicional de tiempo y energía, obligándolas a menudo a esperar en las puertas de los colegios mientras desarrollan actividades productivas paralelas como el tejido o el hilado. Técnicamente, esto se traduce en una "carga de seguridad".

A nivel estadístico, la desigualdad en la distribución del tiempo es crítica: en Bolivia, las mujeres asumen el 96% del tiempo total de cuidados de niños menores de un año, mientras que la seguridad social y los empleadores apenas cubren el 3% y el 1%, respectivamente (López, Magalhães, Araya, & Guizardi, 2023). Según datos de 2022 (Segarra Rivero, Moya Viraca, & Oroz Rodríguez, 2022, pág. 42), en El Alto, las mujeres dedican 6 horas al trabajo doméstico no remunerado, frente a 5,3 horas que dedican los hombres a estas mismas tareas[19].

Esta sobrecarga se agudiza en hogares monoparentales, de los cuales el 39,5% están encabezados por mujeres, quienes son las principales responsables tanto del trabajo doméstico como de la generación de recursos productivos. Esta realidad refleja un modelo "familista" y "maternalista" que descarga en el cuerpo y tiempo de las mujeres las deficiencias de los servicios públicos.

Como estrategia ante la sobrecarga, "Parte de la carga del cuidado de mujeres trabajadoras se delegan a los hijos e hijas mayores" (Soriano & Sostres, 2025, pág. 33) estas consisten en tareas domésticas y supervisión de hijos e hijas más pequeños/as, sin distinción de género, para permitir la movilidad laboral de la madre.

19. El estudio de Segarra Rivero, Moya Viraca, & Oroz Rodríguez, 2022, a diferencia de la EUT del CEDLA (2023), contabiliza que, los hombres invierten un total de 5 2 h en el trabajo de cuidados.

La encuesta EM-DG permite aproximarnos a la percepción de las y los alteños sobre la oferta y accesibilidad de servicios públicos de cuidado para la familia.

EL ALTO: PERCEPCIÓN SOBRE OFERTA PÚBLICA DE SERVICIOS DE CUIDADO — EL ALTO 2026			
TIPO DE SERVICIO DE CUIDADO	NO EXISTEN %	EXISTEN, PERO LEJANOS/INSUFICIENTES %	SUFICIENTES Y ACCESIBLES %
Guarderías / centros infantiles	40,9	57,1	2,0
Centros para personas con discapacidad	79,3	20,7	0,0
Centros para personas adultas mayores	77,3	22,2	0,5

Fuente: Construcción propia con datos Encuesta Municipal de Desigualdades de Género (Encuesta digital), CPMGA, abril 2026

Los datos sobre la infraestructura pública de cuidados configuran uno de los hallazgos más críticos del diagnóstico. Apenas el 2% de la población encuestada en El Alto considera que existen guarderías o centros infantiles suficientes y accesibles en su territorio; el 40,9% señala que directamente no existen, y el 57,1% las identifica como lejanas o insuficientes. Para las personas con discapacidad y adultas mayores, la ausencia es todavía más marcada: el 79.3 y el 77,3% respectivamente reportan inexistencia de servicios específicos. Esta oferta de cuidado estructuralmente insuficiente recae casi en su totalidad sobre el trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar.

La consecuencia práctica de esta ausencia se revela en la pregunta sobre estrategias de cuidado de menores de cinco años durante la jornada laboral: solo el 1,7% de las madres encuestadas utiliza una guardería o centro infantil público; el 2,5% accede a uno privado. El 17,8% reporta que sus hijas e hijos se quedan solas/os o al cuidado de hermanas y hermanos mayores durante la jornada de trabajo. Esta delegación del cuidado a otros niños y niñas —visible en los puestos de venta del mercado, donde se ven adolescentes cuidando a menores mientras la madre trabaja— no es una estrategia elegida sino una respuesta forzada ante la inexistencia de alternativas públicas.

La organización de los cuidados en El Alto, es un pilar de la economía local que se sostiene sobre la sobrecarga de las mujeres bajo condiciones de informalidad y riesgo social. Una política municipal efectiva debe reconocer el cuidado como un derecho humano y un servicio de interés público, invirtiendo en infraestructuras que liberen tiempo femenino para el autocuidado y la autonomía política.

4.4 Precarización laboral y autonomía económica

La autonomía económica es la capacidad de las mujeres de generar ingresos propios y disponer de ellos sin depender de un tercero para satisfacer sus necesidades. La autonomía económica no es solo una condición material; es una dimensión del ejercicio de derechos y de la capacidad de agencia de las mujeres sobre sus propias vidas. Esa capacidad de agencia condicionada por la división sexual del trabajo y el fruto de la misma: la desvalorización de la mujer como sujeto económico y portadora de derechos y su reclusión al ámbito privado. Superar esos condicionamientos de partida asignados al sexo femenino, es más determinante para las mujeres que acceder a un trabajo de generación de ingresos.

Las mujeres participantes del taller de Diagnóstico de Desigualdades de Género identifican la precariedad económica como una de las principales dificultades que enfrentan en el municipio al mismo tiempo reconocen que, incluso cuando las mujeres generan ingresos escasamente toman decisiones autónomas sobre el destino de esos ingresos; señalan además que su trabajo de generación de ingresos no siempre es valorado, particularmente cuando se desarrolla en el ámbito del hogar o en negocios familiares. Las reflexiones de las mujeres, evidencian que desigualdad no sólo es material, es también simbólica en torno al valor del trabajo de generación de ingresos desarrollado por las mujeres.

Estas percepciones permiten identificar otra dimensión de sesgos de género en la estructura económica y del empleo, la ausencia o débil valoración del aporte económico de las mujeres que limitan las condiciones para el ejercicio pleno de la autonomía económica. Este aspecto que se vincula directamente con las demandas de acceso a empleo de mejor calidad, empleo digno.

Acceso a activos y créditos

El acceso a activos —tierra, propiedad, crédito, medios de producción— es una condición estructural de la autonomía económica. Las mujeres han sido históricamente excluidas de la titularidad de bienes tanto por normas jurídicas como por prácticas culturales que transfieren el patrimonio al nombre del varón. En El Alto, donde la urbanización acelerada convive con lógicas comunitarias de origen rural y con dinámicas familiares en las que el trabajo de la mujer sostiene la economía del hogar sin que eso se traduzca en titularidad sobre los bienes generados, esta exclusión adopta formas específicas que los datos evidencian con contundencia.

Lo que muestra la Encuesta Municipal de Desigualdades de Género (EM-DG)

EL ALTO: ACCESO A ACTIVOS Y CRÉDITO, SEGÚN SEXO EN PORCENTAJE		
INDICADOR DE ACCESO A ACTIVOS	MUJER	HOMBRE
Tiene tierra o propiedad a su nombre	17,8	42,2
Propiedad a nombre de pareja o familiar	19,5	12,0
Sin tierras o propiedades	62,7	45,8
Sin acceso a crédito formal	58,5	54,2
Con crédito formal	22,0	24,1

Fuente: Construcción propia con datos Encuesta Municipal de Desigualdades de Género (Encuesta digital), CPMGA, abril 2026

La brecha en titularidad de activos es la más pronunciada de toda la dimensión de autonomía económica: solo el 17,8% de las mujeres alteñas encuestadas declara tener tierras o propiedades registradas a su nombre, frente al 42,2% de los hombres. La diferencia es de más de 24 puntos porcentuales y tiene consecuencias legales y materiales inmediatas: en casos de separación, viudez o conflicto intrafamiliar, las mujeres cuyas propiedades están a nombre de la pareja o de familiares varones quedan en situación de vulnerabilidad patrimonial. El 19,5% de las mujeres declara que sus propiedades están registradas a nombre de otra persona del hogar, situación que afecta solo al 12% de los hombres.

El análisis del PTDI 2021-2025 señala como 'vacío crítico' la ausencia de datos desagregados por sexo sobre tenencia de tierra y vivienda, especialmente en los distritos rurales de El Alto (D-9, D-10, D-11, D-13). Esta omisión no es inocente: la invisibilidad estadística de las mujeres como titulares de bienes reproduce la invisibilidad legal y social de su aporte económico. La dialéctica histórica fundamental, como señala Federici (2010), es la apropiación del trabajo reproductivo y del cuerpo de las mujeres; en El Alto esa apropiación incluye también la negación de su titularidad sobre los activos que sus cuerpos contribuyen a generar.

El acceso al crédito formal presenta una brecha menor pero igualmente significativa: el 58.5% de las mujeres no tiene acceso a ningún instrumento de crédito, frente al 54.2% de los hombres. Esta diferencia se amplía cuando se cruza con la informalidad laboral: las mujeres que trabajan por cuenta propia en el comercio —el perfil más frecuente en El Alto— difícilmente cumplen los requisitos de historial crediticio, colateral o relación de dependencia que exigen los sistemas financieros formales. La ausencia de políticas municipales de crédito productivo con enfoque de género es señalada tanto en las entrevistas institucionales como en las propuestas del taller.

En el análisis crítico del PDTI y de acuerdo a la información proporcionada servidores públicos del GAMEA (Entrevista institucional, abril 2026) se identifica que el GAM solo tiene un programa de promoción económica dirigido a mujeres. El programa de fortalecimiento económico municipal atiende predominantemente a mujeres (90-95% de quienes participan), mayores de 30 años y en su mayoría madres. Las actividades económicas que promueve mantienen a las mujeres participantes en el círculo de los empleos precarios, las y los técnicos entrevistados señalan: "son mujeres que necesitan capacitación técnica en repostería o pollería porque esa es la salida laboral que el mercado alteño les ofrece dentro de las restricciones impuestas por su carga de cuidados".

El análisis crítico del PTDI 2021-2025 confirma la brecha entre reconocimiento formal e intervención transformadora: el Plan menciona el 'dinamismo comercial' de El Alto pero no cuantifica la brecha salarial por sexo ni la precariedad específica de las mujeres en el sector informal. Los indicadores propuestos son de producto —número de mujeres capacitadas, por ejemplo— y no de resultado o cambio estructural.

Autonomía económica

La EM-DG preguntó a la población encuestada quién o quienes deciden sobre el suso y destino de los ingresos en el hogar. El 58,5% de las mujeres afirman que son ellas las que deciden sobre el uso y destino del ingreso, 2,5% señala que es la pareja quién decide sobre los ingresos; 13,3% de los hombres afirman que en pareja o con la pareja toman las decisiones sobre el uso de los ingresos, situación similar reporta el 12,7% de las mujeres.

Si bien la autonomía económica, no es un tema únicamente de porcentajes y montos, la información proporcionada por la EM-DG resulta interesante que más del 58% de mujeres afirmen que deciden solas sobre el ingreso y que el 12,8% del total de los encuestados afirme que la decisión se toma con la pareja.

EL ALTO: QUIÉN DECIDE SOBRE EL USO DE LOS INGRESOS, POR SEXO, EN % Y N								
QUIÉN DECIDE SOBRE EL USO DE LOS INGRESOS, EN EL HOGAR	SEXO							
	MUJER		HOMBRE		NO BINARIO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Yo decido	69	58,5	47	56,6	2	100,0	118	58,1
Decido con mi pareja	15	12,7	11	13,3	0	0	26	12,8
Decido con mi familia	6	5,1	2	2,4	0	0	8	3,9
Mi pareja	3	2,5	0	0,0	0	0	3	1,5
Madre	2	1,7	1	1,2	0	0	3	1,5
Sin dato / No responde	23	19,5	22	26,5	0	0	45	22,2
TOTAL	118	58,1	83	40,9	2	1,0	203	100,0

Fuente: Construcción propia con datos Encuesta Municipal de Desigualdades de Género (Encuesta digital), CPMGA, abril 2026

Al indagar sobre la autonomía económica de las mujeres en un ambiente más de confianza y seguro como fue el taller de Diagnóstico Participativo sobre Desigualdades de Género, con mucha claridad y profundidad analítica una de las participantes afirma “aquí para las mujeres es poco el trabajo, que hay más, hay para el negocio si tienes capital, pero también, no hay dónde dejar a los hijos, se gana poco, apenas alcanza para la comida y los maridos saben decir tu ganas, tienes tu plata y no quieren dar para la casa”. Entonces no solo se trata de generar ingresos, con toda la dificultad y sobre carga laboral que eso supone y sin derechos laborales, se trata de que los hombres y el Estado se hagan corresponsables de la regeneración y cuidado de la familia.

Ellas pueden decidir sobre sus ingresos, pueden decidir en qué gastar, pero si esos ingresos se destinan casi exclusivamente al mantenimiento de la familia y ese destino se decide en condiciones de subordinación como refleja la participante del taller, no parece que fuera una decisión autónoma. La reflexión de las mujeres alteñas aporta al concepto de autonomía económica un elemento central: la “capacidad de agencia”, no se construye en entornos de subordinación de género, la valorización social del trabajo de cuidados y la corresponsabilidad social y del Estado sobre los cuidos son condiciones para ejercer esa “capacidad de agencia”.

4.5 Servicios sociales públicos: Condiciones materiales

El acceso a servicios sociales no equivale a proximidad geográfica. Siguiendo el marco de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, un servicio es verdaderamente accesible cuando existe, se puede llegar a él, responde culturalmente a quienes lo usan y tiene estándares adecuados. Para las mujeres alteñas, barreras adicionales incluyen horarios incompatibles con la carga de cuidados, atención en castellano en contextos de habla aymara, trato discriminatorio y el costo de oportunidad del desplazamiento en una ciudad extensa y con transporte público deficiente. Las tres fuentes convergen en señalar que El Alto no enfrenta principalmente un problema de inexistencia de servicios —a diferencia de municipios más rurales—, sino de calidad, pertinencia cultural y condiciones de acceso.

Servicios básicos en el hogar

La cobertura de servicios básicos en el municipio de El Alto, ha mejorado durante el tiempo intercensal. Según datos del INE a nivel municipal, como se ve en la Tabla N°3, en 2021 un 14% que no tenía agua por cañería y en 2024 este porcentaje se había reducido casi a la mitad (7,74%). Según INE (2024), el acceso a energía eléctrica subió de un 89% en 2001 a un 98,33% en 2024. En cuanto a saneamiento básico, si bien un 52% no contaba con este servicio en 2001, en 2024, un 12,59% no cuenta con saneamiento básico en El Alto. En cuanto al internet, podemos ver que un 5,1 % tenía acceso a internet en el censo 2012, porcentaje que se incrementó exponencialmente a un 86% para el último censo.

De acuerdo a la encuesta EM-DG, la cobertura de servicios básicos en El Alto es alta en electricidad, agua y telefonía, lo que diferencia a este municipio de otros de la región metropolitana. Sin embargo, la brecha en alcantarillado (89,2% de cobertura, frente a casi el 100 en electricidad) y especialmente en internet (47,3%) merece atención. La cobertura incompleta de alcantarillado afecta directamente la salud y la carga de trabajo doméstico: en hogares sin saneamiento adecuado, la gestión de residuos

recae sobre las mujeres. La brecha digital es un obstáculo estructural para el acceso a servicios públicos digitales, a oportunidades de teletrabajo y a los instrumentos de denuncia o seguimiento de casos. En un municipio donde solo el 3,4% de la mujer conoce los programas municipales dirigidos a mujeres, la digitalización municipal sin infraestructura de acceso universal reproduce la exclusión.

EL ALTO: COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS EN EL HOGAR	
SERVICIO BÁSICO	EL ALTO (ENCUESTA %)
Electricidad domiciliaria	99,5
Telefonía móvil	96,1
Agua potable por cañería	97,0
Alcantarillado / eliminación aguas residuales	89,2
Internet	47,3

Fuente: Construcción propia con datos Encuesta Municipal de Desigualdades de Género (Encuesta digital), CPMGA, abril 2026

Educación

En cuanto a la educación, según los datos del INE[20] a nivel nacional, muestran un cambio de tendencia entre el 2021 y el 2024, respecto al nivel de instrucción de hombres y de mujeres, siendo mayor el porcentaje de mujeres en educación superior. Un 33,79% de mujeres alcanzó este nivel, mientras que un 33,53% de

EDUCACIÓN SUPERIOR:

33,79% mujeres

33,53% hombres

20. Datos del INE, a nivel nacional, extraídos del cuadro sobre: Nivel de instrucción alcanzado, por sexo, según área, 2011 - 2024

mujeres alcanzó este nivel, mientras que un 33,53% de hombres lo hizo y entre los periodos 2021 y 2024, el porcentaje de mujeres que alcanzó este nivel fue de un 4,0% mayor, mientras que solo fue de 1,45% mayor en los hombres.

Las desigualdades mayores se registran entre el área urbana y rural, con mayor afectación hacia las mujeres. Como se observa en la tabla siguiente, para el año 2024 solo el 11,40% de mujeres y hombres, de 19 años de edad y más, alcanzan el nivel de educación superior frente al 42,03% de similar población del área urbana. El 15,25% de las mujeres mayores de 19 años habitantes del área rural es analfabeta (ningún nivel de instrucción), frente al 3,5% de mujeres del área urbana. El 5% de los hombres mayores de 19 años del área rural es analfabeto, en el área urbana este porcentaje es de 0,75%. En general el acceso de la población de municipios rurales presenta serías desigualdades respecto al área urbana con evidentes brechas de género en el acceso a la educación.

Bolivia: Nivel de Instrucción Alcanzado por la Población de 19 años o más edad por Sexo, según Área, 2021 – 2024, en porcentaje

ÁREA Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN	AÑO 2021 %		AÑO 2024 %	
BOLIVIA	MUJER	HOMBRE	MUJER	HOMBRE
Ninguno	0,03	0,08	1,96	6,29
Primaria	21,86	25,87	19,87	24,03
Secundaria	42,89	35,51	44,43	35,64
Superior (1)	32,08	29,73	33,5	33,79
Otros cursos (2)	0,62	0,87	0,21	0,25
URBANA				
Ninguno	1,13	3,75	0,75	3,05

Primaria	14,07	19,87	12,51	17,90
Secundaria	43,60	37,22	43,99	37,15
Superior (1)	40,40	38,13	42,50	41,60
Otros cursos (2)	0,80	1,03	0,25	0,30
RURAL				
Educación	6,00	18,99	5,04	15,25
Primaria	40,78	41,33	38,68	40,96
Secundaria	41,16	31,11	45,57	31,48
Superior (1)	11,87	8,12	10,59	12,21
Otros cursos (2)	0,18	0,46	0,13	0,10

Fuente: Elaboración propia en base a datos INE (CENSO 2024)

La encuesta EM-DG en cuanto a la situación del nivel de instrucción en El Alto, detalla la desagregación por sexo del nivel de instrucción, permitiendo identificar brechas de género que afectan negativamente a las mejores a diferencia del dato promedio nacional urbano del INE, que por ser promedio tiende a ocultar las diferencias y distancias.

EL ALTO: NIVEL DE INSTRUCCIÓN POR SEXO								
NIVEL DE INSTRUCCIÓN	SEXO / IDENTIDAD DE GÉNERO							
	MUJER		HOMBRE		NO BINARIO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Educación superior / universitaria	89	28,8	65	78,3	2	100,0	156	76,8
Educación técnica	12	43,2	3	3,6	0	0,0	15	7,4
Educación secundaria	14	1,7	13	15,7	0	0,0	27	13,3
No responde	3	2,5	2	2,4	0	0,0	5	2,5
TOTAL	118	58,1	83	40,9	2	1	203	100

Fuente: Construcción propia con datos Encuesta Municipal de Desigualdades de Género (Encuesta digital), CPMGA, abril 2026

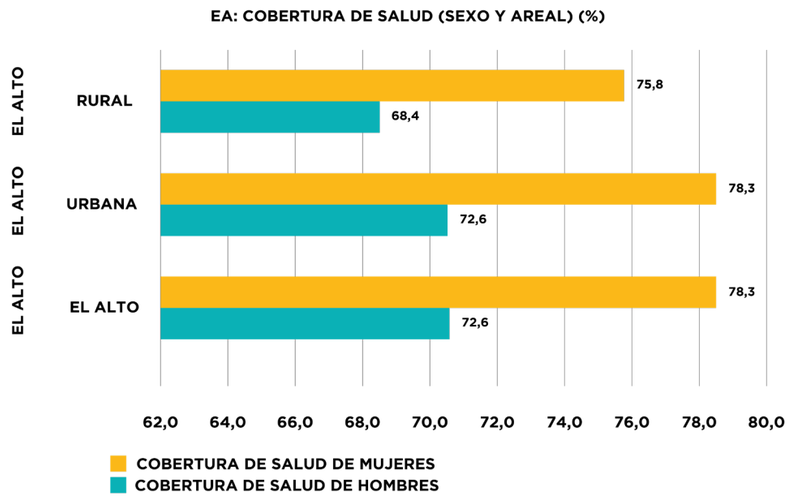
Si bien, las distancias se acortan entre hombres y mujeres en el nivel de instrucción superior, persisten las desigualdades. El 78,3% de los hombres se inscribe en el nivel de instrucción superior, el 75,4% de las mujeres encuestadas tiene instrucción superior. Es llamativo que la brecha en educación técnica sea desfavorable para los hombres 3,5%, en tanto que el 10,2% de mujeres alcanza este nivel de educación. En el nivel de instrucción secundaria la EM-DG reporta que los hombres (15,7%) han alcanzado ese nivel frente al 11,9% de mujeres.

Por las características de pobreza de ingresos y alta precariedad laboral de El Alto, podría esperarse que los niveles de instrucción escolar sean bajos. Sin embargo, la encuesta EM-DG da cuenta que del total de encuestados/as el 76,8% alcanzó el nivel superior de educación.

Disponibilidad y Acceso a Servicios de Salud

En cuanto al acceso a la salud, en El Alto, en base a los datos del INE[21], mostrados en el Gráfico N°3, si bien las mujeres tienen una mayor cobertura nominal que los hombres, éstas enfrentan barreras específicas vinculadas a su ubicación geográfica y rol reproductivo. La cobertura, según datos del INE [22](CENSO 2024) el 78,3% de las mujeres en El Alto contaba con alguna cobertura de salud, frente al 72,6% de los hombres. Las mujeres del área rural presentan menores porcentajes de cobertura (75,8%) frente a la urbana (78,3%).

Gráfico N°3



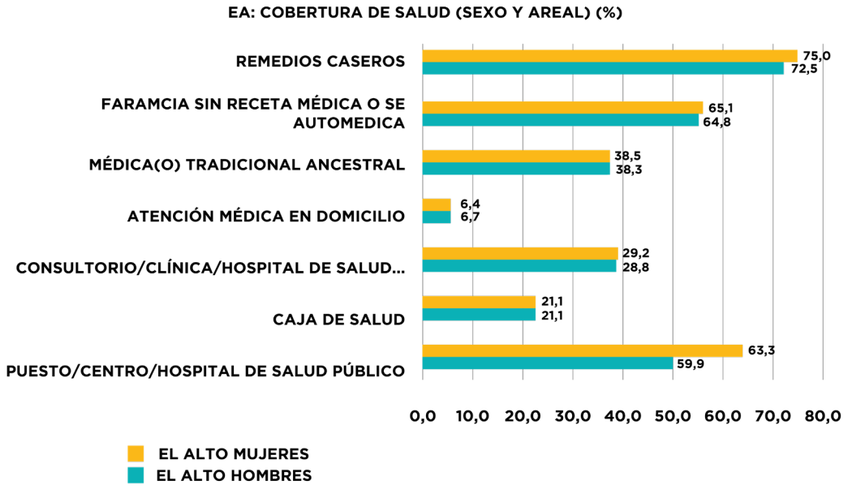
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE, datos por municipio, área y sexo, CENSO 2024

Así mismo, respecto a cómo se atienden su salud las mujeres, como se puede observar en el Gráfico N°4, en base a los datos del INE[23] en 2024, el 63% de las mujeres atendió su salud en establecimientos

21 Datos extractados del INE sobre Cobertura de salud por municipio y sexo (2024), CENSO 2024.
22 Datos extractados del INE sobre Cobertura de salud por municipio y sexo (2024), CENSO 2024
23 Datos extractados del INE sobre Cobertura de salud por municipio y sexo (2024), CENSO 2024

públicos, mientras que un 38,5% recurrió a la medicina tradicional. Es relevante notar el alto uso de remedios caseros (75%) y farmacias (65,1%), lo que sugiere que las mujeres alteñas, quienes actúan como las primeras gestoras de la salud en el hogar, deben resolver las dolencias de manera privada antes de acceder al sistema formal.

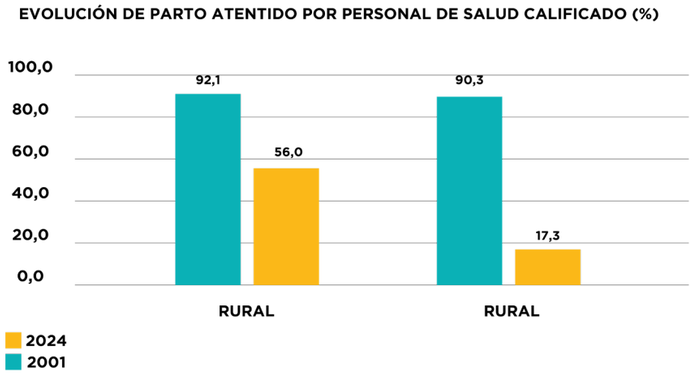
Gráfico N°4



Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales del INE atención de salud, por establecimiento, CENSO 2024

Sobre la salud materna y el parto, según datos del INE, con datos municipales, sobre partos atendidos por personal de salud calificado, se puede observar que El Alto ha logrado una transición masiva hacia el parto institucionalizado, aunque persisten diferencias críticas entre las áreas urbana y rural. En este municipio, el porcentaje de partos atendidos por personal de salud calificado subió drásticamente, del 56% en 2001 al 92,1% en 2024. Sin embargo, aún existe una brecha Urbana-Rural, mientras que en el área urbana el 92,1% de los partos son atendidos por profesionales, en el área rural de El Alto esta cifra se sitúa en el 90,3%.

Gráfico N°5



Fuente: elaboración propia en base a datos municipales del INE

Sobre acceso a seguro de salud, la encuesta EM-DG reporta la importancia central del Seguro Universal de Salud (SUS) para que la población alteña ejerza su derecho a la salud.

El embarazo adolescente sigue siendo un problema crítico en El Alto, con tasas que superan el promedio nacional. La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente y la Política Pública del Embarazo en Adolescentes (PPDEA) tienen alcance formal, pero su implementación municipal enfrenta limitaciones presupuestarias y resistencias culturales. La oferta de servicios diferenciados para adolescentes en los centros de salud municipales es insuficiente. La encuesta digital y las entrevistas confirman que las adolescentes alteñas acceden con dificultad a información sobre derechos sexuales y reproductivos, y que la objeción de conciencia opera de facto como barrera al acceso a la interrupción legal del embarazo, aun cuando esta esté contemplada en el ordenamiento boliviano.

La mortalidad materna, aunque ha descendido en los últimos años, persiste como problema de salud pública en zonas periurbanas con menor cobertura. La calidad de la atención obstétrica, denunciada por usuarias en términos de violencia obstétrica (regaños, prácticas no consentidas, separación injustificada del recién nacido) requiere intervención municipal específica que articule la implementación de los protocolos de atención humanizada del parto.

Un avance significativo en la atención a la salud reproductiva de las mujeres es la habilitación de servicios municipales de atención intercultural en salud, particularmente en la atención al parto.
En las entrevistas a funcionarias/ os del sector salud y mujeres líderes participantes de los talleres de diagnóstico destacan: la implementación de salas de parto con adecuación cultural en el Centro de Salud Ventilla y en el Centro de Salud 3 de mayo, el Centro de Salud Villa Ingenio de la Red Lotes y Servicios y la sala de parto con adecuación cultural en el Centro de Salud San José de Charapaqui de la Red Corea.

EL ALTO: POBLACIÓN QUE CUENTA CON ALGÚN SEGURO DE SALUD, POR SEXO

CUENTA CON SEGURO DE SALUD	SEXO							
	MUJER		HOMBRE		NO BINARIO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí, tengo seguro de salud público (SUS)	97	82,2	66	79,5	2	100,0	165	81,3
Sí, tengo seguro de salud privado	10	8,5	6	7,2	0	0,0	16	7,9
No tengo seguro de salud	11	9,3	11	13,3	0	0,0	22	10,8
TOTAL	118	58,1	83	40,9	2	1	203	100,0

Fuente: Construcción propia con datos Encuesta Municipal de Desigualdades de Género (Encuesta digital), CPMGA, abril 2026

El 81,3% del total de población encuestada declara estar afiliada y acude al SUS para la atención de su salud, el 82,2% de mujeres y el 79,5% acuden al SUS.

La encuesta digital confirma el patrón con datos específicos de El Alto: solo el 27,1% de las mujeres tiene un centro de salud cercano y accesible sin dificultades; el 51,7% tiene un centro cercano, pero enfrenta barreras para acceder (horarios incompatibles con el trabajo y el cuidado, costo del transporte, idioma de atención o trato discriminatorio). El 18,6% declara que el centro queda lejos, cifra significativa para un municipio predominantemente urbano que indica las desigualdades territoriales intramunicipales, especialmente en zonas periurbanas de reciente consolidación.

ATENCIÓN EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA RECIBIDA POR MUJERES — EL ALTO 2026	
TIPO DE ATENCIÓN EN SALUD SEXUAL RECIBIDA (MUJERES)	**EL ALTO %**
No recibió ninguna atención en salud sexual	59,3
Recibió información sobre salud sexual	20,3
Recibió anticonceptivos	17,8
Solo curaciones	2,5

Fuente: Construcción propia con datos Encuesta Municipal de Desigualdades de Género (Encuesta digital), CPMGA, abril 2026

El dato más contundente sobre salud es el relativo a derechos sexuales y reproductivos: el 59,3% de las mujeres alteñas no recibió ninguna atención en salud sexual durante el último año. Solo el 20,3% recibió información sobre salud sexual y el 17,8% accedió a anticonceptivos. Esta cifra tiene múltiples lecturas: puede reflejar ausencia de demanda debido a patrones / normas sociales que impiden el reconocimiento del derecho a la salud sexual o desinformación; puede expresar que los centros de salud no ofrecen proactivamente estos servicios; o puede indicar que las mujeres los buscan, pero encuentran barreras de disponibilidad, horario o trato.

Las participantes del taller de Diagnóstico Participativo de Desigualdades de Género demandaron explícitamente la 'implementación real de la ILE (Interrupción Legal del Embarazo) mediante dotación de medicamentos', señalando que el marco jurídico existe, pero no se traduce en acceso real en los centros de salud del municipio.

4.6 Participación política

La participación política de las mujeres en El Alto es un ejercicio de resistencia frente a un sistema que las precariza económicamente y las sobrecarga con el cuidado de la vida. Para alcanzar una paridad real, no es suficiente con cuotas en las listas, las cuales, por cierto, no siempre se cumplen.

La participación política de las mujeres no se agota en el voto ni en la presencia formal en cargos. Incluye la participación activa en organizaciones sociales, sindicatos, cooperativas, juntas vecinales y espacios comunitarios de deliberación. Desde una perspectiva feminista interseccional, la paridad formal —cuotas, alternancia— no garantiza participación sustantiva si persisten barreras estructurales: la carga de cuidados, la violencia política, la deslegitimación de la voz femenina en asambleas y la exclusión por condición étnica o de clase. El Alto es un municipio con una historia de organización social intensa, con la FEJUVE como actor político de peso histórico y con una tradición de resistencia popular protagonizada en momentos clave por las mujeres; sin embargo, esa potencia política de base se enfrenta a una barrera de acceso cuando intenta transitar hacia los espacios de representación institucional y poder ejecutivo.

Representación formal y participación sustantiva
La paridad en los números, la desigualdad en el poder

Los datos del INE sobre participación política por sexo en órganos del Estado (2009-2021) muestran una asimetría reveladora entre los cargos colegiados y los ejecutivos. En el poder legislativo nacional, las mujeres alcanzaron el 55,6% de las titularidades en el Senado en 2020, resultado de la aplicación efectiva de la norma de paridad y alternancia. Sin embargo, en los gobiernos subnacionales, la brecha es alarmante: las Gobernadoras han representado el 0% en las gestiones 2010, 2015 y 2021; y en las Alcaldías, la participación femenina sufrió un retroceso, pasando del 8,3% en 2015 al 6,0% en 2021. Los Concejos Municipales presentan mejor desempeño, con el 50,7% de mujeres en 2021; pero el análisis por titulares y suplentes revela que las mujeres ocupan proporcionalmente más cargos de suplencia (52% de suplentes son mujeres) que de titularidad real (48%). Esta realidad configura lo que el informe de campo denomina 'paridad descriptiva pero no sustantiva': las mujeres están en las listas, pero no en el poder efectivo.

La Coordinadora de la Mujer registró 71 casos de violencia y acoso político contra mujeres en la gestión 2025 a nivel nacional, con concentración en los departamentos de La Paz y Cochabamba. La Ley 243 contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres establece un marco normativo de protección, pero su implementación efectiva en el nivel municipal sigue siendo insuficiente.

Las barreras desde la propia ciudadanía

EL ALTO: MEMBRESÍA EN ORGANIZACIONES SOCIALES Y CARGOS SEGÚN SEXO		
INDICADOR DE PARTICIPACIÓN	MUJER	HOMBRE
No participa en ninguna organización	70,3	56,6
Participa en sindicato o federación	7,6	25,3
Participa en junta vecinal	4,2	6,0
Participa en organización de mujeres	1,7	—
Nunca ha tenido cargo de representación	83,1	80,7
Tiene cargo de representación actualmente	2,5	6,0
Nunca asiste a asambleas municipales	61,0	59,0

Fuente: Construcción propia con datos Encuesta Municipal de Desigualdades de Género (Encuesta digital), CPMGA, abril 2026

EL ALTO: OBSTÁCULOS PERCIBIDOS PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES	
OBSTÁCULO PRINCIPAL PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES	EL ALTO %
Acoso o violencia política	32,5
Desconfianza en las capacidades de las mujeres	22,7
Falta de recursos económicos	20,7
Trabajo doméstico y de cuidados	8,9
Falta de apoyo de la pareja	5,4
No hay obstáculos	5,9

Fuente: Construcción propia con datos Encuesta Municipal de Desigualdades de Género (Encuesta digital), CPMGA, abril 2026

Los datos de la encuesta EM-DG revelan una participación organizativa marcadamente asimétrica. El 70,3% de las mujeres alteñas no participa en ninguna organización, frente al 56.6% de los hombres; y la brecha más amplia se registra en los sindicatos y federaciones, donde los hombres triplican la presencia femenina (25,3% comparado con 7,6%). La participación en organizaciones específicas de mujeres, que podría ser un espacio de construcción de poder propio, alcanza apenas el 1,7% de las encuestadas.

Un dato especialmente relevante para El Alto es el principal obstáculo identificado por la ciudadanía para la participación de las mujeres: el acoso o la violencia política lidera con el 32,5%, por encima de la desconfianza social (22,7%) y la falta de recursos (20,7%). Esta inversión respecto de la jerarquía que las referencias nacionales suelen presentar —donde la desconfianza en las capacidades suele liderar— sugiere que en El Alto la violencia política es ya un mecanismo de disciplinamiento suficientemente visible y experimentado como para que la ciudadanía lo nombre en primer lugar. El trabajo doméstico y de cuidados aparece como obstáculo para el 8,9%, lo que probablemente subestima su peso real: las propias mujeres tienden a no nombrar su sobrecarga como barrera política porque la han naturalizado como responsabilidad personal.

El nivel de asistencia a espacios de decisión municipal es preocupante en términos generales: el 61% de las mujeres nunca asisten a asambleas, cabildos o reuniones municipales, cifra similar a la masculina (59%). Este nivel de no-participación activa, sin diferencia significativa por sexo, sugiere un problema de confianza y pertinencia institucional que trasciende el género: cuatro de cada diez personas alteñas encuestadas no participan en los espacios donde se toman las decisiones sobre su territorio. Sin embargo, las condiciones para que las mujeres participen cuando lo desean son más restrictivas: la combinación de carga de cuidados, violencia política y deslegitimación simbólica opera como un sistema de barreras superpuestas que no afecta a los hombres de la misma manera.

Voces del taller y las entrevistas

El referente de la FEJUVE 6 de marzo (entrevista, abril 2026) describió la organización vecinal alteña como un espacio de alta intensidad participativa, donde las mujeres tienen presencia, pero no siempre poder de decisión. El informe de campo documenta que la potencia política de base de las mujeres alteñas —visible en los movimientos sociales y en la resistencia histórica de 2003— no se traduce automáticamente en representación institucional, precisamente porque los mecanismos que estructuran el acceso al poder formal reproducen los sesgos del orden patriarcal. Las participantes del taller identificaron como demanda prioritaria la necesidad de 'participar activamente en reuniones de planificación del PTDI del GAMEA' y crear 'plataformas digitales para trámites', señalando que la exclusión no es solo de los espacios de decisión sino también de la información que habilita esa participación.

4.7 La violencia contra las mujeres, niñas y niños

Las fuentes oficiales de información en violencia en razón de género o violencia contra las mujeres creadas a partir de la promulgación de la LEY 348/2013 son la Fiscalía General del Estado, la Fuerza Especial de Lucha Contra la violencia hacia las mujeres quienes deben elaborar y publicar registros administrativos, también el INE es mencionado en la Ley como fuente oficial de información. La debilidad institucional e histórica del procesamiento y difusión de estadísticas y registros administrativos relativos a la igualdad de género y la violencia contra las mujeres, se hace nuevamente evidente con la ausencia de datos municipales y actualizados sobre violencia contra las mujeres. Ante esta limitación recurrimos a otras fuentes de probada idoneidad y veracidad en la construcción y difusión de estos datos.

Según la Fiscalía General del Estado de enero a noviembre 2025 en el departamento de La Paz se han registrado y admitido un total de 10.531 casos de violencia contra las mujeres, a nivel nacional en el mismo periodo la FGE admite 41.647 casos de VRG.

Feminicidios en el departamento de La Paz

La información más detallada disponible a nivel departamental corresponde al feminicidio. La Paz lidera las estadísticas nacionales en esta categoría.

TIPO DE DELITO	PERÍODO 2025	DEPARTAMENTO DE LA PAZ	TOTAL BOLIVIA
Feminicidio Consumado	Ene - 8 de Dic 2025	30 casos	73 casos
Feminicidio en Grado de Tentativa	Ene - Nov 2025	Dato no publicado	160 casos

Fuentes: Fiscalía General del Estado (enero 2026)

La Coordinadora de la Mujer, a través del Observatorio de Género (Nov 2025)[24], respecto a los feminicidios destaca que el 64,2% de los feminicidios fueron cometidos por la pareja o expareja de la víctima, lo que confirma que el hogar sigue siendo el lugar de mayor riesgo. Además, en el 48,15% de los casos, el agresor actuó en estado de sobriedad, lo que desmiente el mito de que estos crímenes son principalmente impulsados por el alcohol.

La misma fuente señala que un 47% de casos de VRG han sido rechazados por el sistema penal para su tratamiento, lo que significa que casi la mitad de las denuncias no siguen el curso legal. A esto se suma que solo un 7,1% tenga condena. Aspectos que afectan directamente el acceso a la justicia que tienen las víctimas.

El dato de impunidad —que la Coordinadora nombra como 'sistema que no garantiza acceso efectivo a la justicia'— no es una anomalía burocrática: es la expresión sistémica de un Estado que protege formalmente a las mujeres pero que no ha construido la capacidad institucional ni el compromiso político necesarios para que esa protección sea real.

En el municipio de El Alto, según estudios realizados por ONU Mujeres en 2023, el 39,6 % de las mujeres declaro haber experimentado violencia física alguna vez en su vida, mientras que el 44,8 % reportó haber sufrido violencia psicológica. Asimismo, el 13,5 % señaló haber sido víctima de violencia sexual y el 20% manifestó haber experimentado violencia digital



24. Fuente: Boletín "25N: Violencias que persisten; derechos que urgen", Coordinadora de la Mujer, noviembre de 2025

en algún momento de su vida. Estos datos revelan una problemática multidimensional que se manifiesta como un continuum de opresión, afectando la autonomía física, psicológica, económica y política de las mujeres en un contexto de rápido crecimiento urbano, persistencia y (sobre todo en este último tiempo) de profundización de estructuras patriarcales y coloniales.

Según el estudio mencionado “solamente un 6,2% de las víctimas de violencia física recurre, en primer lugar, a una institución pública” (Ciudadanía, 2024, pág. 7). Este dato es menor para los otros tipos de violencia. Específicamente en El Alto, solamente un 27,5% y un 11,4% ha realizado denuncia formal por hechos de violencia física y sexual respectivamente.

El municipio de El Alto presenta una alta incidencia de violencia en razón de género y contra niñas, niños y adolescentes (NNA), constituyéndose en uno de los territorios urbanos más afectados del país. De acuerdo con datos recientes, el 31,9% de las mujeres reportó haber sufrido violencia por parte de su pareja o expareja en los últimos 12 meses, incluyendo violencia física, psicológica y sexual. Este dato no solo evidencia la magnitud del problema, sino su carácter extendido y persistente en la vida cotidiana de las mujeres.

En el caso específico de NNA, la violencia se manifiesta de manera interseccional, articulando factores como la edad, el género, la dependencia económica y la limitada autonomía. Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA) en El Alto reportan que una proporción significativa de los casos involucra negligencia, violencia física y abuso sexual en el ámbito intrafamiliar. Estas situaciones se ven agravadas por barreras como el temor a represalias, la dependencia del agresor y la desconfianza en las instituciones, lo que limita la activación oportuna de rutas de protección.

Desde una lectura cualitativa, la violencia en El Alto no se configura como un hecho aislado, sino como un fenómeno socialmente normalizado, particularmente en el ámbito de las relaciones de pareja y las dinámicas familiares. La identificación de prácticas de control y violencia psicológica como “habituales” da cuenta de la existencia de patrones culturales que reducen la percepción de riesgo, retrasan la denuncia y contribuyen a la reproducción de la violencia en el tiempo.

En el taller de Diagnostico Participativo sobre Desigualdades de Género, realizado en El Alto, la violencia emerge como una preocupación transversal y prioritaria. Las lideresas identifican altos índices de violencia en sus múltiples manifestaciones: física, psicológica, sexual, económica, política y digital. Asimismo, se menciona la persistencia de feminicidios y la percepción de inseguridad en distintos espacios: el hogar, el transporte público, el ámbito laboral y los espacios comunitarios.

IV. DESIGUALDADES DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO

Las participantes también señalan dificultades en el acceso a la justicia, incluyendo barreras en la denuncia, debilidades en los mecanismos de protección y una percepción de ineficacia institucional. Este elemento introduce una dimensión crítica sobre la capacidad del Estado para garantizar derechos y responder de manera oportuna y adecuada a la violencia. Estas percepciones permiten anticipar una relación estrecha entre violencia, territorio y debilidad institucional, lo que será clave para el análisis posterior de los servicios de atención (SLIM, DNA, FELCV) y su capacidad de respuesta frente a la demanda existente.

Al respecto la EM-DG indaga sobre el conocimiento y uso de los servicios para la atención a la Violencia en Razón de Género (VRG).

EL ALTO: CONOCIMIENTO Y USO DE SERVICIOS Y SEGURIDAD		
INDICADOR DE VRG	♀ MUJERES %	♂ HOMBRES %
Sabe exactamente a dónde ir en caso de violencia	23,7	27,7
Solo tiene idea, pero no certeza	61,0	47,0
No sabe a dónde acudir	15,3	25,3
Conoce el SLIM y sabe dónde está	20,3	8,4
Ha escuchado del SLIM pero no sabe dónde está	54,2	47,0
No conoce el SLIM en absoluto	23,7	44,6
No usó ningún servicio de atención en el último año	82,2	88,0
Usó SLIM directamente	4,2	1,2
Usó FELCV	4,2	2,4
Poco o nada segura/o en espacios públicos	76,3	80,7

Muy segura/o en espacio público	0,0	2,4
Poco o nada segura/o en el HOGAR	11,9	6,0

Fuente: Construcción propia con datos Encuesta Municipal de Desigualdades de Género (Encuesta digital), CPMGA, abril 2026

EL ALTO: EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL ANTE LA VIOLENCIA — EL ALTO 2026		
EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL	SLIM/DNA %	FELCV/POLICÍA %
Muy buena	0,0	0,0
Buena	5,4	10,3
Regular	22,7	28,6
Mala	23,6	34,0
No sé / no tengo información	48,3	27,1

Fuente: Construcción propia con datos Encuesta Municipal de Desigualdades de Género (Encuesta digital), CPMGA, abril 2026

Los datos de la encuesta EM-DG para El Alto revelan dos problemas superpuestos que el diagnóstico nacional de la Coordinadora de la Mujer también documenta: una brecha de seguridad y una brecha de conocimiento institucional. Respecto a la seguridad en espacios públicos, el 76,3% de las mujeres se siente poco o nada segura en calles, mercados y transporte público; un dato que sorprende no solo por su magnitud sino porque la cifra masculina es casi igual (80,7%), lo que sugiere que El Alto en su conjunto enfrenta una crisis de seguridad ciudadana que afecta a toda la población, aunque sus formas y consecuencias son diferenciadas por género. El dato más revelador es la categoría 'muy segura': absolutamente ninguna mujer encuestada se siente completamente segura en los espacios públicos de El Alto (0,0%), frente al 2,4% de los hombres. La inseguridad total en el espacio público es una experiencia universalmente femenina en este territorio.

Respecto a la seguridad en el hogar, el 11,9% de las mujeres se siente poco segura en su propio espacio doméstico, frente al 6,0% de los hombres. Esta cifra activa una alerta sobre violencia intrafamiliar no reportada: en un municipio donde solo el 27,5% de las víctimas de violencia física hace alguna denuncia, la sensación de inseguridad en el hogar es probablemente un indicador conservador de la prevalencia real.

El conocimiento del SLIM como principal servicio especializado es bajo pero diferencial: el 20,3% de las mujeres lo conoce con precisión, frente al 8,4% de los hombres, El 23,7% de las mujeres no lo conoce en absoluto. El cruce por edad revela que el conocimiento es menor entre las mujeres más jóvenes (7,3% entre 15 y 24 años) y mayor entre las de 35 a 44 años (26,7%), lo que sugiere que la información sobre el servicio llega principalmente a través de la experiencia o de la proximidad con situaciones de violencia, no de campañas proactivas de difusión. La evaluación de quienes sí han tenido contacto con el sistema es mayoritariamente negativa: el 23,6% califica al SLIM como malo y solo el 5,4% como bueno; y el 34% evalúa mal a la FELCV o la policía.

El contexto socioeconómico del municipio —caracterizado por alta informalidad laboral, migración interna y urbanización acelerada— incide directamente en la reproducción de la violencia. La precariedad económica, la sobrecarga de trabajo de cuidados y la falta de acceso a servicios adecuados generan condiciones que incrementan la vulnerabilidad de mujeres y NNA, limitando sus posibilidades de romper ciclos de violencia.

En este sentido, la violencia en El Alto no puede analizarse de manera aislada de las condiciones materiales de vida. Por el contrario, se encuentra profundamente articulada con la desigual distribución del trabajo, la dependencia económica y las limitaciones en el acceso a derechos, lo que refuerza su carácter estructural.

Capacidad institucional del GAMEA para la atención a las violencias: la Plataforma de Atención Integral

El sistema de atención en el municipio —conformado por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA) y los Equipos Policiales Integrales (EPI)— constituye la base operativa de la respuesta institucional frente a la violencia. No obstante, el análisis cualitativo permite identificar que las víctimas enfrentan trayectorias institucionales fragmentadas, caracterizadas por múltiples

derivaciones, tiempos prolongados de atención, procesos burocráticos y situaciones de revictimización. Si bien durante la gestión 2025 se han impulsado esfuerzos de articulación interinstitucional y fortalecimiento de capacidades, persisten limitaciones estructurales vinculadas a la sobrecarga de servicios, la rotación de personal y la insuficiente cobertura territorial. Estas condiciones afectan la calidad, oportunidad y continuidad de la atención, debilitando la capacidad del Estado para garantizar una respuesta integral.

Estas limitaciones no solo responden a problemas operativos, sino que evidencian la persistencia de sesgos de género en la asignación de recursos, en la priorización de políticas públicas y en la valoración institucional de la violencia como problemática estructural.

La observación de campo y las entrevistas con las funcionarias de la Plataforma de Atención Integral a la Familia (PLATFAM) del Distrito 1 (Entrevista grupal, abril 2026) revelan una tensión estructural: la institucionalidad de atención a la violencia ha avanzado en diseño —la PLATFAM integra atención psicológica, social, legal y forense en un mismo espacio, lo que reduce fragmentación y tiempos de denuncia— pero enfrenta limitaciones severas en su operación cotidiana. Las funcionarias señalaron sobrecarga laboral, alta rotación de personal y saturación del sistema de justicia como factores que comprometen la calidad, la oportunidad y la continuidad de la atención.

Un elemento particularmente crítico es la precariedad laboral de las propias funcionarias: trabajan en turnos nocturnos sin garantías adecuadas de transporte ni seguridad, enfrentan contratos de corta duración que impiden acumulación de experiencia especializada, y llevan la atención de situaciones de violencia extrema sin suficiente apoyo institucional para el autocuidado profesional. Las mujeres que atienden la violencia en el Estado son también mujeres cuyo trabajo el sistema no protege ni valora suficientemente: el orden patriarcal también opera al interior de las instituciones que se supone deben desmantelarlo.

La demanda de las mujeres en el taller de Diagnóstico Participativo sobre Desigualdades de Género sobre la atención y eliminación de la VRG, gira en torno a: que el sistema de justicia funcione ‘con calidad, calidez y especialización’ captura en tres palabras lo que las cifras documentan: el problema no es la ausencia de normas sino la brecha entre el marco jurídico de la Ley 348 y la capacidad institucional real de garantizarlo.

La capacidad institucional del GAMEA no debe medirse únicamente por la existencia formal de servicios, sino por su posibilidad real de sostener respuestas continuas, especializadas y territorialmente accesibles.

La Plataforma de Atención Integral, los SLIM, DNA, los servicios de cuidado y los programas dirigidos a población adulta mayor o personas con discapacidad constituyen una base relevante; sin embargo, el diagnóstico muestra que esa base enfrenta restricciones de presupuesto, rotación de personal, fragmentación de enfoques y barreras de acceso que recaen sobre el cuerpo de las mujeres y sobre todo lo feminizado.

Para la gestión 2026-2030, el fortalecimiento institucional requiere al menos cuatro decisiones: estabilizar equipos técnicos especializados; generar programas de gasto específicos para cuidados, violencia y autonomía económica; construir sistemas integrados de información y seguimiento de casos; y formalizar mecanismos de coordinación entre unidades municipales, justicia, policía y organizaciones de mujeres. Sin estas condiciones, la institucionalidad existe, pero no alcanza a subvertir la reproducción cotidiana de la desigualdad.

4.8 La cuestión de los cuidados en el municipio de El Alto

El debate feminista sobre el trabajo doméstico dio lugar a la promoción del concepto de “economía del cuidado”. En un sentido amplio, el contenido del concepto refiere a todas las actividades y prácticas necesarias para la supervivencia cotidiana de las personas en la sociedad en que viven. El cuidado permite atender las necesidades de las personas dependientes, por su edad o por sus condiciones/capacidades (niños y niñas, personas mayores, enfermas o con algunas discapacidades) y también de las que podrían auto proveerse dicho cuidado (Rodríguez, 2015).

Diane Elson (2001) propone el marco analítico de las tres “R”, que busca transformar la organización social del cuidado:

- **RECONOCER:** Dar visibilidad al valor económico y social del trabajo de cuidado no remunerado, así como a quién lo realiza (principalmente mujeres) y su magnitud.
- **REDUCIR:** Aliviar la carga excesiva y los largos tiempos que las mujeres dedican a estas tareas, mediante la provisión de infraestructura y servicios básicos (agua, electricidad, gas, transporte) que agilicen el trabajo doméstico, así como servicios de cuidado públicos y de calidad (escuelas, centros de cuidados para NNA, centros de día para cuidado de personas adultas mayores, centros públicos recreacionales, etc).
- **REDISTRIBUIR:** Superar la actual organización “familista” y patriarcal, donde el cuidado recae desproporcionadamente en las mujeres dentro de las familias. La redistribución busca que el Estado, la comunidad y los hombres asuman una parte equitativa de la responsabilidad.

Este punto es central para lograr la corresponsabilidad social y de género en el cuidado de la familia.

La encuesta EM-DG permite aproximarnos a la percepción de las y los alteños sobre la oferta y accesibilidad de servicios públicos de cuidado para la familia.

EL ALTO: PERCEPCIÓN SOBRE OFERTA PÚBLICA DE SERVICIOS DE CUIDADO — EL ALTO 2026			
TIPO DE SERVICIO DE CUIDADO	NO EXISTEN	EXISTEN, PERO LEJANOS/INSUFICIENTES	SUFICIENTES Y ACCESIBLES
Guarderías / centros infantiles	40,9%	57,1%	22,2%
Centros para personas con discapacidad	79,3%	20,7%	0,0%
Centros para personas adultas mayores	77,3%	22,2%	0,5%

Fuente: Construcción propia con datos Encuesta Municipal de Desigualdades de Género (Encuesta digital), CPMGA, abril 2026

Los datos sobre la infraestructura pública de cuidados configuran uno de los hallazgos más críticos del diagnóstico. Apenas el 2% de la población encuestada en El Alto considera que existen guarderías o centros infantiles suficientes y accesibles en su territorio; el 40,9% señala que directamente no existen, y el 57,1% las identifica como lejanas o insuficientes, Para las personas con discapacidad y adultas mayores, la ausencia es todavía más marcada: el 79,3 y el 77,3% respectivamente reportan inexistencia de servicios específicos. Esta oferta de cuidado estructuralmente insuficiente recae casi en su totalidad sobre el trabajo no remunerado de las mujeres del hogar.

Para efectos de gestión pública, este hallazgo exige diferenciar servicios existentes, servicios insuficientes y servicios ausentes. En El Alto existen dispositivos municipales vinculados a centros infantiles, atención a personas adultas mayores y servicios para personas con discapacidad, pero su cobertura, accesibilidad territorial, estabilidad presupuestaria y articulación con la autonomía económica de las mujeres siguen siendo insuficientes. Los costos a estimar no deberían reducirse a infraestructura; como rubros de costo deben incluir personal, formación, transporte, seguridad, materiales, alimentación, sistemas de registro y evaluación de calidad.

La consecuencia práctica de esta ausencia se revela en la pregunta sobre estrategias de cuidado de menores de cinco años durante la jornada laboral: solo el 1,7% de las madres encuestadas utiliza una guardería o centro infantil público; el 2,5% accede a uno privado. El 17,8% reporta que sus hijas e hijos se quedan solos o al cuidado de hermanas y hermanos mayores durante la jornada de trabajo. Esta delegación del cuidado a otros niños y niñas —visible en los puestos de venta del mercado, donde se ven adolescentes cuidando a menores mientras la madre trabaja— no es una estrategia elegida sino una respuesta forzada ante la inexistencia de alternativas públicas.

V. PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE GESTIÓN Y POLÍTICAS MUNICIPALES

Esta dimensión mide la brecha entre lo que el municipio hace formalmente en materia de género y lo que la ciudadanía conoce, percibe y valora. Las políticas públicas con enfoque de género deben ser no solo formuladas sino conocidas y apropiadas por la población. La percepción de exclusión o inclusión en las decisiones municipales es un indicador de ciudadanía sustantiva y confianza institucional. La agenda que la propia población establece como prioritaria es un insumo político fundamental, especialmente cuando diverge de la agenda institucional. En El Alto, las tres fuentes convergen en señalar una brecha profunda entre lo que el GAMEA formula y lo que la ciudadanía conoce, confía y valora; y en establecer una agenda ciudadana clara cuya columna vertebral es el empleo, la violencia y la seguridad.

Conocimiento ciudadano de la institucionalidad municipal de género

EL ALTO: CONOCIMIENTO Y PERCEPCIÓN SOBRE POLÍTICAS MUNICIPALES — EL ALTO 2026		
INDICADOR DE PERCEPCIÓN Y CONOCIMIENTO	MUJER	HOMBRE
Conoce algún programa municipal para mujeres	3,4	2,4
Ha escuchado que existe, pero no lo conoce	35,6	24,1
Dice que no existe ninguno	29,7	14,5
No sabe si existe	31,4	59,0
Poco o nada tomadas en cuenta por autoridades	80,5	65,0
Bien atendidas en necesidades (solo mujeres)	3,4	—
Poco o nada atendidas en necesidades	82,2	—
Conoce bien el PTDI/POA del municipioe	3,9	—
No conoce el PTDI/POA	53,7	—

Fuente: Construcción propia con datos Encuesta Municipal de Desigualdades de Género (Encuesta digital), CPMGA, abril 2026

EL ALTO: AGENDA CIUDADANA: PROBLEMA MÁS URGENTE PARA LAS MUJERES — EL ALTO 2026	
PROBLEMA MÁS URGENTE PARA MEJORAR LA VIDA DE LAS MUJERES (H5 — MULTIRESPUESTA)	EL ALTO %
Apoyo en la generación de empleo e ingresos	62,6
Seguridad en espacios públicos	46,8
Atención a la violencia hacia las mujeres	40,4
Servicios de cuidado (guarderías, centros AM, discapacidad)	15,8
Mayor participación política de las mujeres	12,3
Acceso a servicios básicos (agua, salud, educación)	8,4

Fuente: Construcción propia con datos Encuesta Municipal de Desigualdades de Género (Encuesta digital), CPMGA, abril 2026

Los datos de percepción sobre la gestión municipal son los más contundentes del diagnóstico en términos de demanda ciudadana. El 80,5% de las mujeres alteñas encuestadas siente que las autoridades municipales las toman poco o nada en cuenta. El 82,2% considera que sus necesidades son poco o nada atendidas. Solo el 3,4% conoce algún programa municipal específicamente dirigido a mujeres. El 53,7% no conoce el PTDI —principal instrumento de planificación del municipio— y solo el 3,9% lo conoce bien. Estas cifras configuran una crisis de ciudadanía sustantiva: las mujeres existen como mayoría demográfica en El Alto pero se perciben —con base en evidencia— como excluidas de las decisiones que organizan su territorio.

La agenda ciudadana que emerge de la pregunta sobre prioridades es clara y jerárquica: empleo e ingresos (62,6%), seguridad en espacios públicos (46,8%) y atención a la violencia (40,4%) concentran las tres cuartas partes de las menciones. Los servicios de cuidado —que el diagnóstico ha identificado como dimensión estructuralmente crítica— apenas alcanzan el 15,8%, lo que sugiere que las mujeres, al no nombrar el cuidado como prioridad política, han internalizado su responsabilidad como obligación personal y no como derecho exigible al Estado. Esta naturalización del cuidado como asunto privado femenino es en sí misma un efecto del orden patriarcal que opera en el imaginario de las propias mujeres.

El PTDI bajo lente de la igualdad de género

El análisis crítico del PTDI 2021-2025 del GAMEA confirma desde la planificación municipal lo que la percepción ciudadana señala desde la experiencia cotidiana. El diagnóstico del Plan nombra la Violencia en Razón de Género como la brecha más crítica, pero las brechas económicas se enmarcan como 'falta de oportunidades' generales, invisibilizando que la pobreza en El Alto tiene rostro de mujer joven y migrante. Las mujeres aparecen en el documento principalmente como 'grupo vulnerable' que necesita protección o como 'madres/cuidadoras' que se benefician de servicios de salud materna; raramente como actoras que definen la política macroeconómica de la ciudad.

La mayor omisión del PTDI es la dimensión del cuidado como política pública: el Plan menciona los centros infantiles pero los trata desde una perspectiva de bienestar infantil, no como infraestructura de la economía del cuidado necesaria para liberar el tiempo de las mujeres. No cuantifica el tiempo que las alteñas dedican al trabajo doméstico y de cuidados, ni el valor económico de ese trabajo —que el Artículo 338 de la CPE manda registrar en las cuentas públicas. Sus indicadores son de producto (número de mujeres capacitadas, porcentaje de partos atendidos) y no de resultado (cambio en la brecha de autonomía económica, reducción de la carga de cuidados). Esta asimetría entre las palabras del Plan y las condiciones que el diagnóstico documenta es el terreno político más urgente para la agenda del nuevo ciclo 2026-2030.

Propuestas y demandas de las mujeres para el GAMEA

El taller Diagnóstico Participativo sobre Desigualdades de Género, produjo un conjunto de propuestas que constituyen una agenda ciudadana feminista para el GAMEA. Las más recurrentes y políticamente articuladas incluyen: una ley municipal que reconozca el trabajo no remunerado de las mujeres y su aporte al PIB; mayor difusión y socialización de los servicios sociales existentes (SLIM, centros infantiles

PAN MANITOS, Unidad del Adulto Mayor); incremento de profesionales capacitadas en los SLIM, DNA y Centros de Atención; sistema de justicia que funcione con calidad, calidez y especialización; asignación de presupuesto adecuado para programas de salud, empleo y prevención de violencia; participación activa en los procesos de planificación del PTDI; y estabilidad contractual del personal municipal mayor a un año.

Estas propuestas no son peticiones desarticuladas: constituyen una respuesta integral y coherente a los nudos críticos identificados por el diagnóstico. La exigencia de estabilidad contractual para el personal, por ejemplo, responde directamente al problema de alta rotación que el diagnóstico documenta como causa del deterioro de la calidad de atención. La demanda de presupuesto propio para programas de prevención responde a la restricción presupuestaria que ya implicó el cierre de centros infantiles. La exigencia de participación en la planificación del PTDI responde a la exclusión que el 80,5% de las mujeres experimenta respecto a las decisiones municipales. La agenda ciudadana sabe exactamente qué necesita; falta el compromiso político y presupuestario para implementarla.

Las participantes del taller fueron extremadamente precisas en su diagnóstico. Demandaron 'espacios seguros para NNA como centros infantiles de estimulación temprana, espacios para adolescentes y jóvenes, y capacitación permanente integral para mujeres'. Señalaron también la necesidad de que el gobierno municipal asuma la 'responsabilidad de cuidado como brindar mejor presupuesto para centros de desarrollo infantil'. Estas demandas no son peticiones de asistencia: son la exigencia de una corresponsabilidad social que la Constitución Política del Estado ya reconoce en su Artículo 64 pero que el municipio no financia de manera proporcional a la carga que actualmente recae sobre los cuerpos de las mujeres.

VI. CONCLUSIONES – HALLAZGOS: EL PERFIL DE LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO EN EL ALTO

El conjunto de evidencias producidas por este diagnóstico configura un perfil de las desigualdades de género en El Alto que no puede leerse como suma de problemas sectoriales independientes. Los datos convergen en señalar un sistema de reproducción de la desigualdad donde el mercado laboral marcado por sesgos de género, la organización del cuidado que sobrecarga de trabajo de cuidados a las mujeres, las restricciones en la titularidad de activos, la violencia en razón de género, la debilidad de los servicios públicos de cuidados, la escasa inclusión de la igualdad de género en la planificación municipal y las barreras socioculturales para el ejercicio de los derechos políticos funcionan de manera articulada, reforzando mutuamente las condiciones de subordinación de las mujeres. Las nueve dimensiones analizadas no son compartimentos estancos: son expresiones del mismo orden patriarcal-colonial-capitalista operando en un territorio específico.

El análisis de las nueve dimensiones del diagnóstico permite identificar un conjunto de hallazgos transversales que atraviesan las áreas temáticas y configuran el perfil estructural de las desigualdades de género en El Alto.

Hallazgo 1. La precariedad laboral se feminiza y se racializa y es el eje estructurante.

Las mujeres alteñas están sobre representadas en el trabajo por cuenta propia (43,2%), en el comercio minorista informal y en los servicios de limpieza y cuidados (11%), que son a la vez los sectores con mayores tasas de informalidad y menores niveles de protección social. La tasa de participación económica femenina (80,5%) supera la masculina (73,5%), pero esta participación se da en condiciones sistemáticamente más precarias. La precarización se articula con la racialización: el 51,4% de la población que se autoidentifica como aymara trabaja por cuenta propia, el doble que la población mestiza. Ser mujer y ser aymara en El Alto significa, estadísticamente, mayor concentración en las formas más vulnerables del mercado laboral. El orden patriarcal, capitalista y colonial se expresa con específica claridad en esta estratificación del mercado laboral.

Hallazgo 2. El cuerpo de las mujeres sostiene la economía del cuidado del municipio.

El 48,3% de las mujeres es la principal responsable del cuidado en el hogar. El 28,8% dedica cinco o más horas diarias a este trabajo no remunerado. La infraestructura pública de cuidados es estructuralmente insuficiente: el 40,9% de la población reporta que no existen guarderías en su territorio. El 17,8% de los niños menores de cinco años de madres trabajadoras se queda solo o al cuidado de hermanas/os mayores durante la jornada laboral. La “jornada de más de 24 horas” que las propias mujeres nombraron en el taller no es metáfora: es la descripción precisa de una organización social donde el trabajo del hogar y de cuidados se realiza sobre la base de la sobrecarga femenina, sin horario, sin salario y sin reconocimiento.

Hallazgo 3. La autonomía económica.

Las mujeres alteñas, en el marco del taller participativo, problematizan profundamente la noción superficial de autonomía económica que suele medirse únicamente por la capacidad de decidir sobre el ingreso. Si bien la encuesta muestra que el 58,5% de las mujeres afirman decidir solas sobre el uso del dinero, el testimonio de una participante introduce una mirada crítica y situada: “se gana poco, apenas alcanza para la comida y los maridos saben decir ‘tu ganas, tienes tu plata’ y no quieren dar para la casa”. Esta voz evidencia que generar ingresos en condiciones de precariedad, sobrecarga laboral y sin derechos, no se traduce automáticamente en autonomía real si el destino de ese dinero es forzado por la necesidad y la ausencia de corresponsabilidad masculina y estatal en los cuidados.

El aporte fundamental de las mujeres alteñas al concepto de autonomía económica consiste en desplazar el énfasis de la "decisión individual sobre el ingreso" hacia la capacidad de agencia, entendida como un proceso que no puede desarrollarse en entornos de subordinación de género. Ellas introducen un elemento central: la autonomía no es solo material ni decisional, sino que exige condiciones estructurales como la valorización social del trabajo de cuidados y la corresponsabilidad efectiva de los hombres y el Estado en la reproducción de la vida. Sin estas condiciones, advierten, "decidir" sobre ingresos que se destinan casi exclusivamente al mantenimiento familiar en contextos de desigualdad, no constituye una decisión autónoma, sino una continuación de la carga desigual impuesta por la división sexual del trabajo.

Hallazgo 4. El cuidado sigue siendo una carga femenina no redistribuida.

El 28,8% de las mujeres alteñas dedica cinco o más horas diarias al trabajo de cuidados no remunerado, frente al 3,6% de los hombres. Esta brecha de casi ocho a uno no es solo una cifra: es la expresión estadística de una organización social del cuidado que extrae valor del cuerpo y del tiempo de las mujeres sin reconocimiento ni retribución. El Estado, a través del gobierno municipal contribuye a esta carga por omisión: por ejemplo, solo el 2% de la ciudadanía encuestada considera que existen guarderías suficientes y accesibles en El Alto. El mandato constitucional del Artículo 64 de corresponsabilidad en el cuidado, y del Artículo 338 de reconocimiento y cuantificación del trabajo del hogar, permanecen como normas incumplidas. La agenda ciudadana de las mujeres que emerge del proceso participativo exige que el nuevo ciclo de planificación 2026-2030 trate el cuidado como política pública, no como responsabilidad privada de las mujeres.

Hallazgo 5. La violencia en razón de género y la inseguridad operan como mecanismo de control en el territorio.

El 11,9% de las mujeres se siente poco segura en su propio espacio doméstico, el 76,3% de las mujeres se siente poco o nada segura en calles, mercados y transporte público, el 32,5% de las mujeres identifica a la violencia política como obstáculo para el ejercicio de sus derechos políticos, el 8,9 % señala que el trabajo del hogar le impide ejercer sus derechos políticos y un 22,7% no lo hace porque la sociedad desconfía de la capacidad de las mujeres. La inseguridad no es solo individual: impacta directamente sobre la carga de cuidados (las madres deben custodiar los desplazamientos de sus hijos/as) y sobre la participación política (el acoso político es el principal obstáculo identificado para la participación). La violencia en razón de género, no se agota en los datos de denuncia, en las estadísticas del sistema judicial, que dicho sea de paso dejan ver los altos porcentajes de impunidad que gozan los agresores; se expresa también en la restricción del uso del tiempo y del espacio de las mujeres, en la desvalorización de las capacidades de las mujeres. Es violencia estructural no episódica y no se limita a la tipología de la Ley 348.

Hallazgo 6. El nivel educativo más alto de las mujeres no se traduce en mejores condiciones laborales ni de ingresos.

La encuesta EM-DG reporta que el 75,4% de las mujeres alteñas encuestadas alcanzó el nivel de instrucción superior, porcentaje próximo al 78,3% masculino. Sin embargo, pese a estos logros educativos, el 60% de la fuerza laboral femenina se concentra en sectores precarios como el comercio, los servicios y la agricultura. Los datos nacionales confirman que la mejora en el nivel educativo de las mujeres no se ha reflejado en paridad salarial, lo que señala la presencia de un sesgo de género (androcentrista) en el mercado laboral que opera con independencia del capital educativo de las mujeres, pero que refleja la presencia de una estructura económica marcada por las desigualdades sociales y de género, que configuran un mercado laboral particularmente excluyente y precario, para las mujeres.

Hallazgo 7. La exclusión de las mujeres de las decisiones municipales es verificable estadísticamente.

El gobierno municipal está casi ausente de la vida de las mujeres alteñas. El 82,2% de las mujeres siente que sus necesidades son poco o nada atendidas por el municipio. El 59,3% no recibió ninguna atención en salud sexual en el último año. El 23,6% califica al SLIM como malo. Solo el 3,4% conoce algún programa municipal para mujeres. Esta ausencia institucional no es neutral: en un municipio con alta carga de cuidados y escaza corresponsabilidad pública en los cuidados, alta precariedad laboral, bajos ingresos, fuerte presencia de violencia contra las mujeres y las/os niños, la debilidad extrema de las políticas públicas sociales, el reducido presupuesto; afecta de manera desproporcionada a las mujeres, descargando sobre el cuerpo de las mujeres las falencias y ausencias del Estado. Esta exclusión no es una percepción subjetiva: el análisis crítico del PTDI 2021-2025 confirma que las mujeres aparecen en el plan principalmente como beneficiarias de políticas de protección, raramente como actoras que definen la política económica y territorial. La transición del nuevo gobierno municipal es el momento político para corregir esta omisión estructural en el ciclo 2026-2030.

Hallazgo 8. La agenda ciudadana feminista sabe exactamente qué necesita.

Las mujeres que participaron en el proceso del diagnóstico produjeron una agenda política coherente, precisa y articulada con los nudos críticos que los datos identifican. Sus demandas incluyen: una ley municipal que reconozca el trabajo no remunerado y su aporte al PIB; mayor difusión de los servicios del SLIM, DNA y centros infantiles; incremento y estabilización del personal especializado en atención a la violencia; asignación presupuestaria para programas de empleo, salud y prevención de violencia; espacios seguros para NNA; y participación activa en la planificación del PTDI 2026-2030. Esta agenda no es un inventario de carencias: es la traducción política de los hallazgos del diagnóstico en un programa de acción municipalmente ejecutable. El GAMEA cuenta con el mandato constitucional, el marco normativo y, ahora, con la evidencia para actuar. La pregunta que queda abierta es si tiene el compromiso político y la voluntad presupuestaria para hacerlo.

VII. RECOMENDACIONES PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL 2026-2030

Las recomendaciones que siguen se formulan para que el diagnóstico ingrese al nuevo ciclo de planificación municipal como una herramienta de transformación y no solo como registro de desigualdades. Implican reconocer que el orden patriarcal, capitalista y colonial organiza la distribución del tiempo, del ingreso, del poder y de la voz pública; por tanto, la respuesta municipal debe articular autonomía económica, sistema local de cuidados, prevención y atención de violencias, participación política de las mujeres, presupuesto sensible al género y mecanismos de gobernanza democrática.

En El Alto, las recomendaciones deben partir de los avances ya identificados y, al mismo tiempo, de sus límites. La existencia de plataformas y servicios no resuelve por sí sola la desigualdad si no se transforma en arquitectura municipal estable, con recursos, rutas de derivación, indicadores de calidad y participación social. La agenda ciudadana feminista ya existe; el desafío político es convertirla en decisión municipal.

Matriz de hallazgos y recomendaciones al Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA): Sobre la autonomía económica de las mujeres y la corresponsabilidad pública en los cuidados

HALLAZGO	ACCIÓN MUNICIPAL PROPUESTA	INDICADOR
La precariedad laboral se feminiza, se racializa y es el eje estructurante de la economía y el empleo. Las mujeres alteñas están sobre representadas en el trabajo por cuenta propia (43,2%), en el comercio minorista informal y en los servicios de limpieza y cuidados (11%), sectores con mayores tasas de informalidad y menores niveles de protección social. La precarización se articula	• Las políticas económicas, fiscales y de empleo son de competencia privativa del nivel central de gobierno. • Sin embargo, el GAM puede contribuir a la reducción de las condiciones de precariedad laboral con el desarrollo de políticas de seguridad ciudadana focalizadas en sectores de concentración de actividades comerciales.	• Número de planes de seguridad ciudadana implementados en espacios y zonas de concentración del comercio informal. • Presupuesto asignado a programas de sensibilización y fortalecimiento de capacidades en derechos humanos e igualdad de género.
con la racialización: el 51,4% de la población que se autoidentifica como aymara trabaja por cuenta propia, el doble que la población mestiza. Ser mujer y ser aymara en El Alto significa, estadísticamente, mayor concentración en las formas más precarias del mercado laboral.	• Programa de sensibilización y fortalecimiento de capacidades en derechos humanos e igualdad de género dirigidos a las y los “guardias municipales”.	• Número de guardias municipales capacitados.
Sobrecarga de cuidados. El cuerpo de las mujeres sostiene la economía del cuidado del municipio. El 48,3% de las mujeres es la principal responsable del cuidado en el hogar. El 28,8% dedica cinco o más horas diarias a este trabajo no remunerado. La infraestructura pública de cuidados es estructuralmente insuficiente: el 40,9% de la población reporta que no existen guarderías en su territorio. El 17,8% de los niños menores de cinco años de madres trabajadoras se queda solo o al cuidado de hermanas/os mayores durante la jornada laboral. La organización social de cuidados se realiza sobre la base de la sobrecarga femenina, sin horario, sin salario y sin reconocimiento.	• Definir e implementar la política y sistema municipal de corresponsabilidad de los cuidados que integre y articule a las áreas de educación, salud, infraestructura pública, transporte, promoción económica, desarrollo humano, seguridad ciudadana etc.	• Monto de presupuesto municipal asignado a la política municipal de corresponsabilidad de cuidados. • Número de medidas de mejora de la calidad y cobertura de los servicios de atención a NNA, adultos mayores y personas con discapacidad implementados. • Número de centros de atención a NNA, adultos mayores y personas con discapacidad habilitados y en funcionamiento, por distrito. • Número de personal contratado especialista en atención a NNA adultos mayores y personas con discapacidad. • Número de centros de atención y albergues para personas en condición de exclusión y marginalidad.
La autonomía económica restringida. Para las mujeres de EA la autonomía no es solo material ni decisional, exige condiciones estructurales como la valorización social del trabajo de cuidados y la corresponsabilidad efectiva de los hombres y el Estado en la reproducción de la vida. Sin estas condiciones, advierten, "decidir" sobre ingresos que se destinan casi exclusivamente al mantenimiento	• Diseño e implementación de la política municipal de promoción de la autonomía económica de las mujeres que integre programas sensibilización y reconocimiento del trabajo de cuidados desarrollado por las mujeres en el hogar, Programas de fomento a la corresponsabilidad de los cuidados en la familia, la comunidad y el GAM.	• Presupuesto asignado a la política municipal de promoción de la autonomía económica de las mujeres. • Número de beneficiarias del fondo de promoción económica para mujeres emprendedoras. • Número de hombres participantes en acciones de sensibilización en corresponsabilidad de cuidados.

familiar en contextos de desigualdad, no constituye una decisión autónoma, sino una continuación de la carga desigual impuesta por la división sexual del trabajo.	• Creación del Fondo Municipal para el financiamiento y fortalecimiento de emprendimientos económicos de mujeres. • Articulación de la política municipal de cuidados con la política de promoción de la autonomía económica de las mujeres. • Promoción a la creación de cooperativas comunales de consumo y abastecimiento de alimentos.	• Número de cooperativas comunales de abastecimiento.

Hallazgos y recomendaciones al Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA): en Atención y prevención de la Violencia en Razón de Género (VRG)

HALLAZGO	ACCIÓN MUNICIPAL PROPUESTA	INDICADOR
La VRG y la inseguridad operan como mecanismo de control en el territorio. La VRG, no se agota en los datos de denuncia, se expresa también en la restricción del uso del tiempo y del espacio de las mujeres, en la desvalorización de las capacidades de las mujeres. Es violencia estructural no episódica y no se limita a la tipología de la Ley 348. El 11,9% de las mujeres se siente poco segura en su propio espacio doméstico, el 76,3% de las mujeres se siente poco o nada segura en calles, mercados y transporte público, el 32.5 de las mujeres identifica a la violencia política como obstáculo para el ejercicio de sus derechos políticos, El 23,6% califica al SLIM como malo.	• Plan municipal de fortalecimiento de la capacidad y calidad de atención de los SLIMs y DNAs y el conjunto de los servicios de la Plataforma de atención a la familia. • Mejora de la institucionalización de los servicios de atención a la VRG y DNA.	• Porcentaje de incremento del presupuesto a SLIM y DNA. • Número de profesionales de los servicios de SLM DNA institucionalizados / número de profesionales temporales. • Número de espacios individualizados para la atención psicológica y legal en SLIM y DNA. • Número de cámara Gesell instalada y funcionando. • Número de acciones sostenidas de prevención de la VRG.

Hallazgos y recomendaciones al Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA): en el derecho a la participación y liderazgo de las mujeres

HALLAZGO	ACCIÓN MUNICIPAL PROPUESTA	INDICADOR
Limitaciones para el ejercicio de los derechos políticos y la participación ciudadana de las mujeres. El 32,5% de las mujeres identifica a la violencia política como obstáculo para el ejercicio de sus derechos políticos, el 8,9 % señala que el trabajo del hogar le impide ejercer sus derechos políticos y un 22,7% no lo hace porque la sociedad desconfía de la capacidad de las mujeres.	• Diseño e implementación de un programa vecinal de fortalecimiento de la participación y liderazgo de las mujeres, que incluya escuelas de liderazgo para mujeres, promoción y difusión de los derechos políticos de las mujeres, sensibilización en corresponsabilidad de cuidados.	• Número de mujeres participantes en escuelas vecinales de liderazgo y participación política. • Número de JV incluidas en el programa de fortalecimiento de la participación y liderazgo de las mujeres. • Número de participantes hombres en talleres de corresponsabilidad de cuidados.

Hallazgos y recomendaciones al Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA): en la atención a las necesidades y demandas de las mujeres

HALLAZGO	ACCIÓN MUNICIPAL PROPUESTA	INDICADOR
Las necesidades y demandas de las mujeres ausentes en las decisiones del GAM. El gobierno municipal está casi ausente de la vida de las mujeres alteñas. El 82,2% de las mujeres siente que sus necesidades y demandas son poco o nada atendidas por el municipio. El análisis crítico del PTDI 2021-2025 confirma que las mujeres aparecen en el plan principalmente como beneficiarias de políticas de protección, raramente como actoras que definen la política económica y territorial.	• Plan de promoción y apoyo a la participación de las organizaciones de mujeres en los espacios de participación ciudadana y control social.	• Número de organizaciones de mujeres participantes de los procesos de planificación y rendición de cuentas del GAM.

La agenda ciudadana de las mujeres. Sus demandas incluyen: una ley municipal que reconozca el trabajo no remunerado del hogar y su aporte al PIB; mayor difusión de los servicios del SLIM, DNA y centros infantiles; incremento e institucionalización del personal especializado en atención a la violencia; mayor asignación presupuestaria para programas de empleo, salud y prevención de violencia; creación de espacios seguros para NNA; y promover la participación activa de las organizaciones de mujeres en la planificación del PTDI 2026-2030.	• Elaboración de proyecto de Ley municipal de reconocimiento y puesta en valor del trabajo de Cuidado desarrollado por las mujeres. • Fortalecer la difusión de los Slim DNA. • Incremento de personal especializado e institucionalizado en servicios de atención a la VRG y DNA. • Mejora del financiamiento de los programas de Empleo, salud y educación.	• Número de demandas atendidas.

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES CONSULTADAS

Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). (s.f.). Economías transformadoras de las mujeres, desde la igualdad de género y feminismo. Recuperado de https://www.afd.fr/es/proyectos/economias-transformadoras-de-las-mujeres-desde-la-igualdad-de-genero-y-feminismo

Alianza Global por los Cuidados. (s.f.). Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza. Recuperado de https://globalallianceforcare.org/es/the-alliance/members/member/1176-centro-de-promoción-de-la-mujer-gregoria-apaza-gregoria-apaza-women-s-promotion-center.html

Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA). (s.f.). Quienes somos. Recuperado de https://gregorias.org.bo/quienes-somos/

Ciudadanía — Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública. (2024). Violencias que persisten: desafíos en el acceso a la justicia para las mujeres en Bolivia. La Paz: Ciudadanía.

Coordinadora de la Mujer. (2025, noviembre). Boletín 25N: Violencias que persisten; derechos que urgen. La Paz: Coordinadora de la Mujer / Observatorio de Género.

CEDLA — Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario. (2023). Encuesta de Uso del Tiempo (EUT). Ciudades capitales y El Alto. La Paz: CEDLA.

CEDLA — Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario. (2024). Políticas que apuestan por el empleo informal. La Paz: CEDLA. Recuperado de https://cedla.org

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA). (2021). Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) 2021–2025. El Alto: GAMEA.

Elson, D. (2001). Gender justice, human rights and neo-liberal economic policies. En M. Molyneux y S. Razavi (Eds.), Gender justice, development and rights (pp. 78–114). Oxford: Oxford University Press.

Federici, S. (2010). Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Madrid: Traficantes de Sueños.

Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). (2024). Bolivia: Cifras de la Mujer. Boletín IBCE Cifras. Santa Cruz: IBCE. Recuperado de https://ibce.org.bo

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2012). Censo Nacional de Población y Vivienda 2012. La Paz: INE.

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2024). Censo Nacional de Población y Vivienda 2024. La Paz: INE.

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2025). Estadísticas Sociales: Bolivia, condición de actividad y sexo. La Paz: INE. Recuperado de https://www.ine.gob.bo

López, N., Magalhães, D., Araya, L., y Guizardi, M. (2023). Maternidad, cuidados y trabajo en contextos de migración en Bolivia. Revista Latinoamericana de Estudios de Familia.

Rivera Cusicanqui, S. (2018). Un mundo ch'ixi es posible. Ensayos desde un presente en crisis. Buenos Aires: Tinta Limón.

Rodríguez, C. (2015). Economía feminista y economía del cuidado. Aportes conceptuales para el estudio de la desigualdad. Nueva Sociedad, 256, 30–44.

Segarra Rivero, P., Moya Viraca, M., y Oroz Rodríguez, L. (2022). Trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en El Alto: una aproximación desde la economía feminista. La Paz: CPMGA / Yachay Lab.

Soriano, C., y Sostres, F. (2025). Cuidados, territorio y economía popular en El Alto: la nueva ruralidad urbana. La Paz: CPMGA.

Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2013). La economía informal y el trabajo decente: una guía de recursos sobre políticas, apoyando la transición hacia la formalidad. Ginebra: OIT.

Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2024). Panorama Laboral 2023: América Latina y el Caribe. Lima: OIT / Oficina Regional para América Latina y el Caribe.

Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2025). Panorama Laboral 2025: América Latina y el Caribe. Lima: OIT / Oficina Regional para América Latina y el Caribe.

ONU Mujeres Bolivia. (2023). Estudio sobre violencia contra las mujeres en el municipio de El Alto. La Paz: ONU Mujeres.

UDAPE — Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas. (2022). Informalidad laboral en Bolivia. La Paz: UDAPE.

UDAPE. (2025). Brechas sociales en Bolivia: Un análisis de la desigualdad en cifras (2005–2024). La Paz: UDAPE.

NORMATIVA

Bolivia. Asamblea Constituyente. (2009). Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. La Paz: Gaceta Oficial del Estado.

Bolivia. Asamblea Legislativa Plurinacional. (2012). Ley N° 243: Ley contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres. La Paz: Gaceta Oficial del Estado.

Bolivia. Asamblea Legislativa Plurinacional. (2013). Ley N° 348: Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. La Paz: Gaceta Oficial del Estado.

CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA MUJER
gregoria apaza

En colaboración con

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

AFD
AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT